



### Sumario

#### I Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

##### RECOMENDACIONES

##### **Banco Central Europeo**

2021/C 303/01	Recomendación del Banco Central Europeo, de 23 de julio de 2021, por la que se deroga la Recomendación BCE/2020/62, (BCE/2021/31) .....	1
---------------	---	---

#### II Comunicaciones

##### COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

##### **Comisión Europea**

2021/C 303/02	No oposición a una concentración notificada (Asunto M.10313 — CVC/CDPQ/WAVS) <sup>(1)</sup> .....	3
2021/C 303/03	No oposición a una concentración notificada (Asunto M.10268 — SYNEX/Tech Data) <sup>(1)</sup> .....	4

#### IV Información

##### INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

##### **Comisión Europea**

2021/C 303/04	Tipo de cambio del euro — 28 de julio de 2021 .....	5
---------------	---	---

## INFORMACIÓN RELATIVA AL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

### Órgano de Vigilancia de la AELC

2021/C 303/05	Anuncio de Noruega relativo a la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos — Anuncio de convocatoria para solicitar autorizaciones de producción de petróleo en la plataforma continental de Noruega – Concesiones en las zonas predefinidas para 2021 .....	6
2021/C 303/06	Ayuda estatal - Decisión de no formular objeciones .....	9

### V Anuncios

#### PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

##### Tribunal de la AELC

2021/C 303/07	Sentencia del Tribunal de 25 de marzo de 2021 — En el asunto E-3/20 — Gobierno de Noruega, representado por el Ministerio de Sanidad y Servicios Asistenciales ( <i>Helse- og omsorgsdepartementet</i> ), contra Anniken Jenny Lindberg ( <i>Libre circulación de personas – Directiva 2005/36/CE – Reconocimiento de cualificaciones profesionales – Acceso a la profesión de odontólogo – Reconocimiento automático</i> ) .....	10
2021/C 303/08	Sentencia del Tribunal de 25 de marzo de 2021 en el asunto E-4/20 — Tor-Arne Martinez Haugland y otros contra el Gobierno de Noruega, representado por el Ministerio de Sanidad y Servicios Asistenciales ( <i>Helse- og omsorgsdepartementet</i> ) ( <i>Libre de circulación de personas — Directiva 2005/36/CE — Reconocimiento de cualificaciones profesionales– Acceso a la profesión de psicólogo – Sistema general de reconocimiento – Noción de «misma profesión»</i> ) .....	11

#### PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA COMERCIAL COMÚN

##### Comisión Europea

2021/C 303/09	Anuncio de inicio de una reconsideración por expiración de las medidas antidumping aplicables a las importaciones de aspartamo originario de la República Popular China .....	12
2021/C 303/10	Anuncio de expiración de determinadas medidas antidumping .....	23

#### PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

##### Comisión Europea

2021/C 303/11	Ayuda Estatal – Italia — Ayuda estatal SA.55678 (2019/NN) — Nuevo préstamo a Alitalia — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea <sup>(1)</sup> .....	24
---------------	---	----

<sup>(1)</sup> Texto pertinente a efectos del EEE.

## I

(Resoluciones, recomendaciones y dictámenes)

## RECOMENDACIONES

## BANCO CENTRAL EUROPEO

## RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

de 23 de julio de 2021

por la que se deroga la Recomendación BCE/2020/62

(BCE/2021/31)

(2021/C 303/01)

EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito <sup>(1)</sup>, en particular el artículo 4, apartado 3,

Considerando lo siguiente:

- (1) El 27 de marzo de 2020 el Banco Central Europeo (BCE) adoptó la Recomendación BCE/2020/19 del Banco Central Europeo <sup>(2)</sup>, que recomendaba que, al menos hasta el 1 de octubre de 2020, las entidades de crédito se abstuvieran de repartir dividendos y de contraer compromisos irrevocables de repartirlos, así como de recomprar acciones para remunerar a los accionistas. El 27 de julio de 2020 el BCE prolongó su recomendación hasta el 1 de enero de 2021 mediante la adopción de la Recomendación BCE/2020/35 del Banco Central Europeo <sup>(3)</sup>.
- (2) Pese a la mejora de las condiciones macroeconómicas y a la reducción de la incertidumbre económica debida a la pandemia de COVID-19, dicha incertidumbre seguía siendo elevada a finales de 2020 y seguía afectando a la capacidad de las entidades de crédito para prever sus necesidades de capital a medio plazo. Ante la persistencia de esa incertidumbre, el BCE adoptó la Recomendación BCE/2020/62 del Banco Central Europeo <sup>(4)</sup>, por la que derogó la Recomendación BCE/2020/35 pero recomendó que las entidades de crédito fueran muy prudentes al decidir los importes de los dividendos o repartirlos o al recomprar acciones para remunerar a los accionistas.
- (3) Las últimas proyecciones macroeconómicas indican el comienzo de la recuperación económica y una mayor reducción de la incertidumbre económica. Por consiguiente, el BCE entiende que ya no se dan las razones que justificaron la Recomendación BCE/2020/62. La menor incertidumbre económica actual permite llevar a cabo una evaluación supervisora individual y en profundidad de la prudencia de los planes de las entidades de crédito de repartir dividendos y recomprar acciones, así como evaluar prospectivamente sus planes de capital, en el contexto del ciclo supervisor normal.

<sup>(1)</sup> DO L 287 de 29.10.2013, p. 63.

<sup>(2)</sup> Recomendación BCE/2020/19 del Banco Central Europeo, de 27 de marzo de 2020, sobre el reparto de dividendos durante la pandemia del COVID-19 y por la que se deroga la Recomendación BCE/2020/1 (DO C 1021 de 30.3.2020, p. 1).

<sup>(3)</sup> Recomendación BCE/2020/35 del Banco Central Europeo, de 27 de julio de 2020, sobre el reparto de dividendos durante la pandemia de COVID-19 y por la que se deroga la Recomendación BCE/2020/19 (DO C 251 de 31.7.2020, p. 1).

<sup>(4)</sup> Recomendación BCE/2020/62 del Banco Central Europeo, de 15 de diciembre de 2020, sobre el reparto de dividendos durante la pandemia de COVID-19 y por la que se deroga la Recomendación BCE/2020/35 (OJ C 437 de 18 de diciembre de 2020, p. 1).

HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

La presente recomendación deroga la Recomendación BCE/2020/62 con efectos a partir del 30 de septiembre de 2021.

Hecho en Fráncfort del Meno el 23 de julio de 2021.

*La presidenta del BCE*  
Christine LAGARDE

---



## II

*(Comunicaciones)*

## COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

## COMISIÓN EUROPEA

**No oposición a una concentración notificada****(Asunto M.10313 — CVC/CDPQ/WAVS)****(Texto pertinente a efectos del EEE)**

(2021/C 303/02)

El 23 de julio de 2021, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado interior. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) n° 139/2004 del Consejo <sup>(1)</sup>. El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés y se hará público una vez que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

- en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad,
- en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es>) con el número de documento 32021M10313. EUR-Lex da acceso al Derecho de la Unión en línea.

---

<sup>(1)</sup> DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.

**No oposición a una concentración notificada****(Asunto M.10268 — SYNnex/Tech Data)****(Texto pertinente a efectos del EEE)**

(2021/C 303/03)

El 23 de julio de 2021, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado interior. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) n° 139/2004 del Consejo <sup>(1)</sup>. El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés y se hará público una vez que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

- en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad,
- en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es>) con el número de documento 32021M10268. EUR-Lex da acceso al Derecho de la Unión en línea.

---

<sup>(1)</sup> DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.

## IV

(Información)

## INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

## COMISIÓN EUROPEA

Tipo de cambio del euro <sup>(1)</sup>

28 de julio de 2021

(2021/C 303/04)

1 euro =

Moneda	Tipo de cambio	Moneda	Tipo de cambio		
USD	dólar estadounidense	1,1807	CAD	dólar canadiense	1,4840
JPY	yen japonés	129,97	HKD	dólar de Hong Kong	9,1880
DKK	corona danesa	7,4373	NZD	dólar neozelandés	1,7013
GBP	libra esterlina	0,85095	SGD	dólar de Singapur	1,6057
SEK	corona sueca	10,1963	KRW	won de Corea del Sur	1 362,99
CHF	franco suizo	1,0802	ZAR	rand sudafricano	17,4792
ISK	corona islandesa	148,40	CNY	yuan renminbi	7,6722
NOK	corona noruega	10,4828	HRK	kuna croata	7,5066
BGN	leva búlgara	1,9558	IDR	rupia indonesia	17 117,84
CZK	corona checa	25,625	MYR	ringit malayo	5,0003
HUF	forinto húngaro	359,72	PHP	peso filipino	59,465
PLN	esloti polaco	4,5965	RUB	rublo ruso	86,7666
RON	leu rumano	4,9213	THB	bat tailandés	38,780
TRY	lira turca	10,0973	BRL	real brasileño	6,0931
AUD	dólar australiano	1,6081	MXN	peso mexicano	23,5823
			INR	rupia india	87,8330

<sup>(1)</sup> Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

## INFORMACIÓN RELATIVA AL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

## ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC

**Anuncio de Noruega relativo a la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos****Anuncio de convocatoria para solicitar autorizaciones de producción de petróleo en la plataforma continental de Noruega – Concesiones en las zonas predefinidas para 2021**

(2021/C 303/05)

El Ministerio de Petróleo y Energía de Noruega anuncia una convocatoria de solicitudes de *autorizaciones de producción de petróleo* de conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos <sup>(1)</sup>.

Las licencias de producción se concederán únicamente a sociedades anónimas con domicilio social en Noruega o en otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Acuerdo EEE), o a personas físicas domiciliadas en un Estado parte en el Acuerdo EEE.

Podrán concederse autorizaciones de producción a empresas que no sean titulares de una autorización en la plataforma continental de Noruega, siempre que hayan sido precalificadas para la obtención de una autorización en dicha Plataforma.

El Ministerio aplicará las mismas condiciones a las empresas individuales y a las empresas que presenten una solicitud como parte de un grupo. Tanto los solicitantes que presenten una solicitud individual como los que formen parte de un grupo y presenten una solicitud conjunta serán considerados solicitantes a título individual de una autorización de producción. A partir de las solicitudes presentadas por solicitantes individuales o por grupos, el Ministerio podrá componer grupos de titulares de autorizaciones a los que se conceda una nueva autorización de producción, suprimiendo incluso solicitantes de una solicitud conjunta o añadiendo solicitantes individuales, y nombrar al operador de dichos grupos.

La concesión de una participación en una autorización de producción estará subordinada a que los titulares de las autorizaciones suscriban un acuerdo sobre el ejercicio de actividades petroleras que incluya un acuerdo de explotación conjunta y un acuerdo contable. Si la autorización de producción está dividida estratigráficamente, los titulares de las dos autorizaciones divididas estratigráficamente deberán suscribir también un acuerdo conjunto específico de explotación que regule la relación entre ambos a este respecto.

Una vez firmados dichos acuerdos, los titulares de las autorizaciones constituirán una empresa conjunta en la que el porcentaje de su participación será siempre idéntico a su participación en la autorización de producción.

Los documentos de autorización se basarán principalmente en documentos pertinentes para las concesiones en las zonas predefinidas para 2020. El objetivo es que los potenciales solicitantes puedan conocer los elementos fundamentales de las posibles modificaciones del marco antes de la presentación de solicitudes.

**Criterios para la concesión de una autorización de producción**

Con miras a una buena gestión de los recursos y una exploración y producción de petróleo rápidas y eficientes en la plataforma continental de Noruega, así como a efectos de la composición de los grupos titulares de autorizaciones a este fin, se aplicarán los siguientes criterios para la concesión de participaciones en las autorizaciones de producción y la designación de operadores:

- a) El conocimiento geológico, por parte de los solicitantes, de la zona geográfica de que se trate, así como la forma en que los titulares de autorizaciones se propongan llevar a cabo una exploración petrolífera eficiente.

<sup>(1)</sup> DO L 164 de 30.6.1994, p. 3.

- b) La experiencia técnica pertinente de los solicitantes y la forma en que dicha experiencia pueda contribuir a una exploración rentable y, en su caso, a la producción de petróleo en la zona geográfica de que se trate.
- c) La experiencia previa de los solicitantes en la plataforma continental de Noruega, o una experiencia equivalente en otras zonas.
- d) La adecuada capacidad económica de los solicitantes para llevar a cabo la exploración y, en su caso, la producción de petróleo en la zona geográfica de que se trate.
- e) Si los solicitantes son o han sido titulares de una autorización de producción, el Ministerio podría tener en cuenta cualquier forma de ineficacia o de falta de responsabilidad demostrada por los solicitantes en su calidad de titulares de una autorización. También podrían tenerse en cuenta consideraciones de seguridad nacional, si el Ministerio lo estima pertinente.
- f) Las autorizaciones de producción se concederán por norma general a empresas conjuntas, en las que al menos uno de los participantes haya perforado al menos un pozo en la plataforma continental de Noruega como operador, o cuente con experiencia operativa equivalente fuera de dicha plataforma.
- g) Las autorizaciones de producción se concederán por norma general a dos o más titulares, de los que al menos uno cuente con la experiencia indicada en la letra f).
- h) El operador designado para una autorización de producción en el Mar de Barents deberá haber perforado al menos un pozo en la plataforma continental de Noruega como operador, o contar con experiencia operativa equivalente fuera de dicha plataforma.
- i) En lo que respecta a las autorizaciones de producción en aguas profundas, tanto el operador designado como al menos otro titular de una autorización deberán haber perforado al menos un pozo en la plataforma continental de Noruega como operador, o contar con experiencia operativa equivalente fuera de dicha plataforma. En la autorización de producción, uno de los titulares de la misma deberá haber perforado en aguas profundas como operador.
- j) Por lo que respecta a las autorizaciones de producción en las que se prevea la perforación de pozos de exploración a presión elevada y/o altas temperaturas (HTHP, por sus siglas en inglés), tanto el operador designado como al menos otro titular de la autorización deberán haber perforado al menos un pozo en la plataforma continental de Noruega como operador, o contar con experiencia operativa equivalente fuera de dicha plataforma. En la autorización de producción, un titular de la autorización deberá haber perforado un pozo HTHP como operador.

### **Bloques que pueden solicitarse**

Pueden presentarse solicitudes de participación en autorizaciones de producción para aquellos bloques del área predefinida para los que no se haya concedido una autorización, tal como se indica en los mapas publicados por la Dirección de Petróleo de Noruega (NPD, por sus siglas en inglés). También es posible presentar solicitudes para superficies del área predefinida para las que se haya renunciado a una autorización después del anuncio, de conformidad con los mapas actualizados interactivos Factmaps de la Dirección de Petróleo de Noruega, que se encuentran en la página web de la NPD.

Cada autorización de producción podrá incluir uno o varios bloques o una o varias partes de un bloque o bloques. Los solicitantes deberán limitar la solicitud a las zonas para las que hayan realizado un mapa de potencial.

El texto completo del anuncio, con mapas detallados de las zonas disponibles, puede consultarse en la página web de la Dirección de Petróleo de Noruega [www.npd.no/apa2021](http://www.npd.no/apa2021).

Las solicitudes de autorizaciones de producción de petróleo se presentarán por vía electrónica, por ejemplo, a través de L2S, al

Ministerio de Petróleo y Energía  
Apdo. de correos 8148 Dep.  
N-0033 Oslo,  
NORUEGA

Se presentará una copia por vía electrónica, por ejemplo, a través de L2S, a la

Dirección de Petróleo de Noruega  
Apdo. de correos 600  
N-4003 Stavanger,  
NORUEGA

**Plazo: 12.00 horas del 8 de septiembre de 2021.**

La concesión de autorizaciones de producción de petróleo, en el marco de las adjudicaciones correspondientes a las zonas predefinidas para 2021 en la plataforma continental de Noruega, está prevista en el primer trimestre de 2022.

---

**Ayuda estatal - Decisión de no formular objeciones**

(2021/C 303/06)

El Órgano de Vigilancia de la AELC no formula objeciones a la siguiente medida de ayuda estatal:

Fecha de adopción de la Decisión	16 de abril de 2021
N.º del expediente	86711
Número de la Decisión	031/21/COL
Estado miembro de la AELC	Noruega
Región	Todo el territorio de Noruega
Denominación (y/o nombre del beneficiario)	Régimen general de ayuda a la liquidez de las empresas de los municipios afectados por la pandemia de COVID-19
Base jurídica	Propuesta al Parlamento n.º 79 (pp. 37-38 del capítulo 553 post 68 del sistema municipal de compensación a las empresas) Cartas de asignación a los municipios (asunto 21/1215-2) y (asunto 21/1215-31) Innst. 233 S (2020-2021) (pp. 25-26)
Tipo de medida	Régimen
Objetivo	Garantizar el acceso a liquidez, mediante subvenciones directas, a empresas locales que se enfrentan a una repentina escasez o indisponibilidad de liquidez debido al impacto de la pandemia de COVID-19 en la economía.
Tipo de ayuda	Subvenciones
Presupuesto	Estimación de 2 000 millones NOK
Intensidad	100 %
Duración	La ayuda en virtud del régimen se concederá a más tardar el 31 de diciembre de 2021
Sectores económicos	Todos los sectores excepto el financiero
Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda	Ministerio de Administración Local y Modernización Postboks 8112 Dep 0032 Oslo NORUEGA

El texto original de la Decisión, del que se han suprimido todos los datos confidenciales, puede consultarse en la página web del Órgano de Vigilancia de la AELC:

<http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/>

## V

(Anuncios)

## PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

## TRIBUNAL DE LA AELC

## SENTENCIA DEL TRIBUNAL

de 25 de marzo de 2021

En el asunto E-3/20

**Gobierno de Noruega, representado por el Ministerio de Sanidad y Servicios Asistenciales (*Helse- og omsorgsdepartementet*), contra Anniken Jenny Lindberg**

*(Libre circulación de personas – Directiva 2005/36/CE – Reconocimiento de cualificaciones profesionales – Acceso a la profesión de odontólogo– Reconocimiento automático)*

(2021/C 303/07)

Con respecto a la SOLICITUD DE DICTAMEN CONSULTIVO al Tribunal en el asunto E-3/20, Gobierno de Noruega, representado por el Ministerio de Sanidad y Servicios Asistenciales, contra Anniken Jenny Lindberg, en virtud del artículo 34 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia, por parte del Tribunal Supremo de Noruega (*Norges Høyesterett*), en cuanto a la interpretación de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, en particular su artículo 21, adaptado al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, el Tribunal, compuesto por los magistrados Páll Hreinsson (presidente), Per Christiansen (magistrado ponente) y Bernd Hammermann, dictó sentencia el 25 de marzo de 2021, cuya parte dispositiva reza:

1. Para beneficiarse del reconocimiento automático previsto en el artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, el solicitante debe estar en posesión de todos los certificados que constituyan la prueba de las cualificaciones oficiales que aparecen en el anexo V de la Directiva y que se ajusten a los requisitos del Estado de origen para la profesión de la que se trate.
2. Los artículos 28 y 31 del Acuerdo EEE deben interpretarse en el sentido de que requieren que el Estado de acogida evalúe de forma individualizada los conocimientos y la formación acreditados por las cualificaciones profesionales del solicitante cuando dicho solicitante desee ejercer una profesión comprendida en la categoría de profesiones con condiciones mínimas de formación coordinadas, pero no cumpla las condiciones establecidas en los artículos de 10 a 21 de la Directiva 2005/36/CE.
3. La evaluación individual de los conocimientos y capacidades del solicitante por parte del Estado de acogida debe implicar una comparación de todos los diplomas, certificados y demás títulos y la experiencia del solicitante con los propios requisitos de dicho Estado para el ejercicio de la profesión de que se trate. Si los conocimientos y cualificaciones del solicitante certificados por el título y la experiencia profesional pertinente no son equivalentes, o se corresponden solo parcialmente, a los exigidos por el Estado de acogida, dicho Estado debe especificar de qué formación carece el solicitante para que pueda completarla o complementarla.
4. El hecho de que el solicitante no tenga pleno acceso a la profesión en el Estado de origen no puede ser determinante para apreciar si el solicitante puede ejercer la misma profesión en el Estado de acogida.



## SENTENCIA DEL TRIBUNAL

de 25 de marzo de 2021

en el asunto E-4/20

**Tor-Arne Martínez Haugland y otros contra el Gobierno de Noruega, representado por el Ministerio de Sanidad y Servicios Asistenciales (*Helse- og omsorgsdepartementet*)***(Libre de circulación de personas — Directiva 2005/36/CE — Reconocimiento de cualificaciones profesionales— Acceso a la profesión de psicólogo – Sistema general de reconocimiento – Noción de «misma profesión»)*

(2021/C 303/08)

Con respecto a la SOLICITUD DE DICTAMEN CONSULTIVO al Tribunal en el asunto E-4/20, Tor-Arne Martínez Haugland y otros contra el Gobierno de Noruega, representado por el Ministerio de Sanidad y Servicios Asistenciales en virtud del artículo 34 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia, por parte del Tribunal de Apelación de Borgarting (*Borgarting lagmannsrett*), en cuanto a la interpretación de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, en particular los artículos 4 y 13, adaptados al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como los artículos 28 y 31 de dicho Acuerdo, el Tribunal, compuesto por los magistrados Páll Hreinsson (presidente), Per Christiansen (magistrado ponente) y Bernd Hammermann, dictó sentencia el 25 de marzo de 2021, cuya parte dispositiva reza:

1. Debe evaluarse caso por caso si una profesión en el Estado de acogida y una profesión en el Estado de origen pueden considerarse «la misma profesión» a efectos de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Esta evaluación debe basarse en una comparación entre las actividades abarcadas por la profesión en el Estado de origen y las actividades de la profesión que el solicitante quiere ejercer en el Estado de acogida. Si las actividades abarcadas por ambas profesiones son comparables, en el sentido de que son equivalentes en términos de las actividades que abarcan, teniendo en cuenta cualquier diferencia relevante en el alcance y la naturaleza de dichas actividades, deben ser consideradas como la misma profesión a efectos de la Directiva 2005/36/CE.

A la hora de determinar cuándo una profesión en el Estado de origen y una profesión en el Estado de acogida constituyen la misma profesión a efectos de la Directiva 2005/36/CE, el ejercicio de determinadas actividades durante un tiempo limitado, en un contexto formativo, sujeto a la condición de realizar estudios adicionales, no puede considerarse ejercicio de una profesión.

Las diferencias en el grado de responsabilidad respecto de los pacientes y el grado de independencia pueden ser importantes para determinar el alcance exacto o la naturaleza de las actividades a la hora de evaluar si dos profesiones son la «misma profesión» a efectos de la Directiva 2005/36/CE.

2. La posibilidad de exigir medidas compensatorias en virtud del artículo 14 de la Directiva 2005/36/CE no puede tener ninguna incidencia en la interpretación de la noción de «misma profesión» en el sentido del artículo 13 de dicha Directiva.
3. La expresión «orientada específicamente al ejercicio de una profesión determinada» que figura en el artículo 3, apartado 1, letra 3), de la Directiva 2005/36/CE debe interpretarse en el sentido de que abarca la formación específicamente concebida para preparar a los candidatos para el ejercicio de una profesión determinada. No abarca cualificaciones que den acceso a una amplia gama de profesiones o certifiquen, *inter alia*, una competencia meramente académica en un ámbito determinado.
4. Los solicitantes que no cumplan los requisitos para el reconocimiento de cualificaciones profesionales a efectos de la Directiva 2005/36/CE pueden invocar los artículos 28 y 31 del Acuerdo del EEE como base para ejercer una profesión regulada en el Estado de acogida.

En la evaluación de las cualificaciones con arreglo a los artículos 28 y 31 del Acuerdo del EEE, el Estado de acogida debe comparar todos los diplomas, certificados y demás títulos y la experiencia profesional pertinente del solicitante con sus propios requisitos para el ejercicio de la profesión de que se trate. Si los conocimientos y cualificaciones del solicitante certificados por el título y la experiencia profesional pertinente no son equivalentes, o se corresponden solo parcialmente, a los requeridos, el Estado de acogida debe especificar cuál es la formación de la que carece el solicitante para que la complete o complemente.

---

## PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA COMERCIAL COMÚN

### COMISIÓN EUROPEA

#### **Anuncio de inicio de una reconsideración por expiración de las medidas antidumping aplicables a las importaciones de aspartamo originario de la República Popular China**

(2021/C 303/09)

A raíz de la publicación del anuncio sobre la expiración inminente <sup>(1)</sup> de las medidas antidumping vigentes en relación con las importaciones de aspartamo originario de la República Popular China, la Comisión Europea («la Comisión») ha recibido una solicitud de reconsideración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea <sup>(2)</sup> («el Reglamento de base»).

#### **1. Solicitud de reconsideración**

La solicitud fue presentada el 26 de abril de 2021 por HSWT France S.A.S. («HSWT» o «el solicitante»), el único fabricante de la Unión, que representa el 100 % de la producción total de aspartamo de la Unión.

El expediente para inspección por las partes interesadas contiene una versión pública de la solicitud y el análisis del grado de apoyo a la solicitud por parte de los productores de la Unión. El punto 5.6 del presente anuncio ofrece información sobre el acceso al expediente para las partes interesadas.

#### **2. Producto objeto de reconsideración**

El producto objeto de la presente reconsideración es el aspartamo [éster 1-metílico de N-L-alfa-aspartil-L-fenil-alanina; éster N-metílico del ácido 3-amino-N-(alfa-carbometoxifenil)-succinámico], CAS RN 22839-47-0, clasificado actualmente en el código NC ex 2924 29 70 (código TARIC 2924 29 70 05) («el producto objeto de reconsideración»). Los códigos NC y TARIC se indican a título meramente informativo.

#### **3. Medidas vigentes**

Las medidas actualmente en vigor consisten en un derecho antidumping definitivo impuesto por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1247 de la Comisión <sup>(3)</sup>.

#### **4. Motivos para la reconsideración**

El motivo en el que se basa la solicitud es que la expiración de las medidas probablemente acarrearía la continuación del dumping y la reaparición del perjuicio para la industria de la Unión.

##### **4.1. Alegación de probabilidad de continuación del dumping**

El solicitante alegó que, debido a la existencia de distorsiones significativas a tenor del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base, no es adecuado utilizar los precios y costes internos de China.

<sup>(1)</sup> DO C 366 de 30.10.2020, p. 24.

<sup>(2)</sup> DO L 176 de 30.6.2016, p. 21.

<sup>(3)</sup> Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1247 de la Comisión, de 28 de julio de 2016, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de aspartamo originario de la República Popular China (DO L 204 de 29.7.2016, p. 92). Los derechos provisionales se impusieron mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/262 de la Comisión (DO L 50 de 26.2.2016, p. 4).

Para justificar las alegaciones de distorsiones significativas, el solicitante se basó en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre las distorsiones significativas en la economía de China, de 20 de diciembre de 2017 («el informe de la Comisión»). En particular, el solicitante alegó que la producción y la venta del producto objeto de reconsideración se ven potencialmente afectadas por los factores que se mencionan, entre otros, en la Parte III, Distorsiones en sectores concretos, Sección 16, «Sector químico», del informe.

Además, el solicitante se refirió al XIII Plan Quinquenal Nacional Chino, al XIII Plan Quinquenal para la Industria Química y Petroquímica (2016-2020), a la Iniciativa «Made in China 2025», al Plan de Desarrollo de la Industria Ligera (2006-2020) y a las conclusiones alcanzadas por varias investigaciones de la UE y los Estados Unidos sobre los precios en el sector químico chino.

El informe de la Comisión está disponible en el expediente para inspección por las partes interesadas y en el sitio web de la Dirección General de Comercio <sup>(4)</sup>.

A la luz de la información disponible, la Comisión considera que hay elementos de prueba suficientes, con arreglo al artículo 5, apartado 9, del Reglamento de base, que apuntan a que, debido a la existencia de distorsiones significativas que afectan a los precios y los costes, es inadecuado utilizar los precios y los costes internos de China, lo cual justifica el inicio de una investigación con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base, la alegación de continuación y reaparición del dumping se basa en la comparación de un valor normal, calculado a partir de costes de producción y venta que reflejan precios o valores de referencia no distorsionados en un país representativo adecuado, con el precio de exportación (franco fábrica) del producto objeto de reconsideración procedente de China cuando se vende para su exportación a la Unión. Con arreglo a este cálculo, resultan unos márgenes de dumping significativos en lo que concierne a China.

#### 4.2. *Alegación de la probabilidad de continuación o reaparición del perjuicio*

El solicitante alega la probabilidad de reaparición del perjuicio. A este respecto, el solicitante ha presentado pruebas suficientes de que, si se permite que expiren las medidas, es probable que aumente el nivel actual de las importaciones en la Unión del producto objeto de reconsideración desde el país afectado, debido a la existencia en la República Popular China de una capacidad significativa no utilizada y al atractivo del mercado de la Unión.

Por último, el solicitante alega que la desaparición del perjuicio se ha debido principalmente a la existencia de medidas y que, si se deja que estas expiren, la reanudación de importaciones en cantidades sustanciales a precios objeto de dumping desde el país afectado probablemente acarrearía una reaparición del perjuicio para la industria de la Unión.

### 5. Procedimiento

Habiendo determinado, previa consulta al Comité creado en virtud del artículo 15, apartado 1, del Reglamento de base, que existen pruebas suficientes de la probabilidad de dumping y perjuicio para justificar el inicio de una reconsideración por expiración, la Comisión inicia mediante el presente anuncio una reconsideración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base.

La reconsideración por expiración determinará si es probable que la expiración de las medidas conlleve una continuación o reaparición del dumping del producto objeto de reconsideración originario del país afectado y una continuación o reaparición del perjuicio para la industria de la Unión.

El Reglamento (UE) 2018/825 del Parlamento Europeo y del Consejo (paquete de modernización de los instrumentos de defensa comercial) <sup>(5)</sup>, que entró en vigor el 8 de junio de 2018, introdujo varios cambios respecto al calendario y los plazos aplicables anteriormente en los procedimientos antidumping. Por consiguiente, la Comisión pide a las partes interesadas que respeten las fases y los plazos del procedimiento que se prevén en el presente anuncio, así como en futuras comunicaciones de la Comisión.

La Comisión también señala a la atención de las partes que, a raíz de la pandemia de COVID-19, ha publicado una Comunicación <sup>(6)</sup> sobre las consecuencias de dicha pandemia para las investigaciones antidumping y antisubvenciones que puede aplicarse al presente procedimiento.

<sup>(4)</sup> Los documentos mencionados en el informe sobre el país también pueden obtenerse previa solicitud debidamente motivada.

<sup>(5)</sup> Reglamento (UE) 2018/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por el que se modifican el Reglamento (UE) 2016/1036 relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea, y el Reglamento (UE) 2016/1037 sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Unión Europea, DO L 143 de 7.6.2018, p. 1.

<sup>(6)</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29>. Procedimientos relativos a la aplicación de la política comercial común en relación con las consecuencias del brote de COVID-19 para las investigaciones antidumping y antisubvenciones (DO C 86 de 16.3.2020, p. 6).

### 5.1. **Período de investigación de la reconsideración y período considerado**

La investigación de la continuación o reaparición del dumping abarcará el período comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021 («el período de investigación de la reconsideración»). El análisis de las tendencias pertinentes para evaluar la probabilidad de continuación o reaparición del perjuicio abarcará el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el final del período de investigación de la reconsideración («el período considerado»).

### 5.2. **Observaciones sobre la solicitud y el inicio de la investigación**

Se invita a todas las partes interesadas a dar a conocer sus opiniones sobre los insumos y los códigos del Sistema Armonizado (SA) facilitados en la solicitud (7) en un plazo de quince días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el *Diario Oficial de la Unión Europea* (8).

Todas las partes interesadas que deseen presentar alguna observación sobre la solicitud (incluidas las cuestiones relativas al perjuicio y la causalidad) o sobre cualquier aspecto relativo al inicio de la investigación (incluido el grado de apoyo a la solicitud) deberán hacerlo en un plazo de treinta y siete días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.

Toda solicitud de audiencia con respecto al inicio de la investigación deberá presentarse en el plazo de quince días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.

### 5.3. **Procedimiento para determinar la probabilidad de continuación o reaparición del dumping**

En una reconsideración por expiración, la Comisión examina las exportaciones a la Unión en el período de investigación de la reconsideración e, independientemente de estas exportaciones, estudia si la situación de las empresas que producen y venden el producto objeto de reconsideración en el país afectado es tal que es probable que las exportaciones a la Unión a precios objeto de dumping continúen o reaparezcan si expiran las medidas.

Por tanto, se invita a participar en la investigación de la Comisión a todos los productores (9) del producto objeto de reconsideración del país afectado, independientemente de si, en el período de investigación de la reconsideración, exportaron o no a la Unión el producto objeto de reconsideración, incluidos los que no cooperaron en la investigación que condujo a la adopción de las medidas vigentes.

#### 5.3.1. *Investigación de los productores del país afectado*

Dado que el número de productores del país afectado implicados en esta reconsideración por expiración puede ser elevado, y con objeto de finalizar la investigación dentro de los plazos reglamentarios, la Comisión podrá seleccionar una muestra para limitar a una cifra razonable el número de productores que serán investigados (proceso también denominado «muestreo»). El muestreo se efectuará de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de base.

A fin de que la Comisión pueda decidir si es necesario el muestreo y, de serlo, seleccionar una muestra, por el presente anuncio se ruega a todos los productores, o a los representantes que actúen en su nombre, incluidos los que no cooperaron en la investigación que condujo a la adopción de las medidas objeto de la presente reconsideración, que faciliten a la Comisión, en los siete días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio, información sobre sus empresas. Dicha información deberá facilitarse a través de TRON.tdi en la siguiente dirección: [https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R742\\_SAMPLING\\_FORM\\_FOR\\_EXPORTING\\_PRODUCER](https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R742_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER). La información de acceso a Tron puede consultarse en los puntos 5.6 y 5.9.

Al objeto de obtener la información que considere necesaria para la selección de la muestra de productores en el país afectado, la Comisión se pondrá también en contacto con las autoridades del país afectado, y podrá ponerse en contacto con las asociaciones de productores conocidas de dicho país.

Si es necesaria una muestra, los productores serán seleccionados en función del mayor volumen representativo de producción, venta o exportación que pueda investigarse razonablemente en el plazo disponible. La Comisión notificará a todos los productores conocidos del país afectado, a las autoridades del país afectado y a las asociaciones de productores del país afectado, en su caso a través de las autoridades de dicho país, qué empresas han sido seleccionadas para formar parte de la muestra.

Una vez que la Comisión haya recibido la información necesaria para seleccionar una muestra de productores, informará a las partes interesadas de su decisión sobre su inclusión en la muestra. Salvo disposición en contrario, los productores incluidos en la muestra tendrán que presentar un cuestionario cumplimentado en un plazo de treinta días a partir de la fecha en la que se les notifique la decisión de incluirlos en la muestra.

(7) También se facilita información sobre los códigos SA en el resumen de la solicitud de reconsideración, disponible en el sitio web de la Dirección General de Comercio (<http://trade.ec.europa.eu/tdi/>).

(8) Salvo que se especifique otra cosa, todas las referencias a la publicación del presente anuncio se entenderán hechas a su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

(9) Se entiende por productor toda empresa del país afectado que fabrique el producto objeto de reconsideración, incluida cualquiera de sus empresas vinculadas que participe en la producción, en las ventas nacionales o en la exportación de dicho producto.

La Comisión añadirá una nota al expediente para inspección por las partes interesadas en la que se plasme la selección de la muestra. Cualquier observación con respecto a la selección de la muestra debe recibirse en el plazo de tres días a partir de la fecha de notificación de la decisión sobre la muestra.

Puede encontrarse una copia del cuestionario dirigido a los productores del país afectado en el expediente para inspección por las partes interesadas y en el sitio web de la Dirección General de Comercio [https://trade.ec.europa.eu/tdi/case\\_details.cfm?id=2533](https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2533).

El cuestionario se pondrá también a disposición de todas las asociaciones de productores conocidas y de las autoridades de dicho país.

Sin perjuicio de la posible aplicación del artículo 18 del Reglamento de base, se considerará que han cooperado en la investigación las empresas que, habiéndose mostrado de acuerdo con su posible inclusión en la muestra, no hayan sido seleccionadas para formar parte de ella («productores cooperantes no incluidos en la muestra»).

### 5.3.2. Procedimiento adicional con respecto al país afectado sujeto a distorsiones significativas

Se invita a todas las partes interesadas a que expongan sus puntos de vista, presenten la información oportuna y aporten pruebas justificativas con respecto a la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base, en las condiciones establecidas en el presente anuncio. Salvo disposición en contrario, la información y las pruebas justificativas deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo de treinta y siete días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.

Con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, letra e), del Reglamento de base, tras el inicio, la Comisión informará con prontitud a las partes en la investigación sobre las fuentes pertinentes que tenga previsto utilizar para determinar el valor normal en China con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, de dicho Reglamento, mediante una nota en el expediente para inspección por las partes interesadas. Se cubrirán todas las fuentes, incluida la selección de un tercer país representativo apropiado cuando proceda. Las partes en la investigación dispondrán de un plazo de diez días a partir de la fecha en la que esa nota se añade al expediente para formular observaciones.

De acuerdo con la información de que dispone la Comisión, un posible tercer país representativo de China, en este caso, es Tailandia. Con el fin de seleccionar finalmente el tercer país representativo apropiado, la Comisión examinará si existen países con un nivel de desarrollo económico similar al de China en los que haya producción y ventas del producto objeto de reconsideración y en los que puedan recogerse con facilidad los datos pertinentes. Cuando haya más de un país de estas características, se dará preferencia, en su caso, a los países con un nivel adecuado de protección social y medioambiental.

Con respecto a las fuentes pertinentes, la Comisión invita a todos los productores de China a que faciliten información sobre los materiales (en bruto y transformados) y la energía empleados en la fabricación del producto objeto de reconsideración en un plazo de quince días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio. Dicha información deberá facilitarse a través de TRON.tdi en la dirección siguiente: [https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R742\\_INFO\\_ON\\_INPUTS\\_FOR\\_EXPORTING\\_PRODUCER\\_FORM](https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R742_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM). La información de acceso a Tron puede consultarse en los puntos 5.6 y 5.9.

Además, toda información fáctica facilitada para valorar los costes y los precios con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base debe presentarse en el plazo de sesenta y cinco días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio. Esta información fáctica debe extraerse exclusivamente de fuentes accesibles al público.

A fin de obtener la información que considere necesaria para su investigación sobre las presuntas distorsiones significativas en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base, la Comisión pondrá también un cuestionario a disposición del Gobierno chino.

### 5.3.3. Investigación de los importadores no vinculados <sup>(10)</sup> <sup>(11)</sup>

Se invita a participar en esta investigación a los importadores no vinculados que importen en la Unión el producto objeto de reconsideración procedente del país afectado, incluidos los que no cooperaron en la investigación que condujo a la adopción de las medidas vigentes.

<sup>(10)</sup> Solo podrán incluirse en la muestra importadores que no estén vinculados con productores del país afectado. Los importadores vinculados con productores deberán cumplimentar el anexo I del cuestionario destinado a dichos productores. De conformidad con el artículo 127 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión, se considera que dos personas están vinculadas en los siguientes casos: a) si una de ellas forma parte de la dirección o del consejo de administración de la empresa de la otra; b) si ambas tienen jurídicamente la condición de asociadas; c) si una es empleada de otra; d) si una tercera persona posee, controla o tiene, directa o indirectamente, el 5 % o más de las acciones o títulos con derecho a voto de una y otra; e) si una de ellas controla, directa o indirectamente, a la otra; f) si ambas son controladas, directa o indirectamente, por una tercera persona; g) si juntas controlan, directa o indirectamente, a una tercera persona; o h) si son miembros de la misma familia (DO L 343 de 29.12.2015, p. 558). Solo se considera que las personas son miembros de la misma familia si su relación de parentesco es una de las siguientes: i) marido y mujer; ii) ascendientes y descendientes en línea directa, en primer grado; iii) hermanos y hermanas (carnales, consanguíneos o uterinos); iv) ascendientes y descendientes en línea directa, en segundo grado; v) tío o tía y sobrino o sobrina; vi) suegros y yerno o nuera; y vii) cuñados y cuñadas. De conformidad con el artículo 5, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión, se entiende por «persona» toda persona física o jurídica, así como cualquier asociación de personas que no sea una persona jurídica pero cuya capacidad para realizar actos jurídicos esté reconocida por el Derecho nacional o de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).

<sup>(11)</sup> Los datos facilitados por importadores no vinculados también pueden utilizarse en relación con aspectos de la presente investigación distintos de la determinación del dumping.

Dado que el número de importadores no vinculados implicados en esta reconsideración por expiración puede ser elevado, y con objeto de finalizar la investigación dentro de los plazos reglamentarios, la Comisión podrá seleccionar una muestra para limitar a una cifra razonable el número de importadores no vinculados que serán investigados (proceso también denominado «muestreo»). El muestreo se efectuará de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de base.

A fin de que la Comisión pueda decidir si es necesario el muestreo y, de serlo, seleccionar una muestra, por el presente anuncio se ruega a todos los importadores no vinculados, o a los representantes que actúen en su nombre, incluidos los que no cooperaron en la investigación que condujo a la adopción de las medidas objeto de la presente reconsideración, que se den a conocer a la Comisión. Deberán hacerlo en un plazo de siete días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, facilitando a la Comisión la información sobre sus empresas que se pide en el anexo del presente anuncio.

A fin de obtener la información que considere necesaria para la selección de la muestra de importadores no vinculados, la Comisión también podrá ponerse en contacto con las asociaciones conocidas de importadores.

Si es necesaria una muestra, los importadores podrán ser seleccionados sobre la base del mayor volumen representativo de ventas en la Unión del producto objeto de reconsideración procedente del país afectado que pueda investigarse razonablemente en el plazo disponible. La Comisión notificará a todos los importadores no vinculados conocidos y asociaciones conocidas de importadores qué empresas han sido seleccionadas para formar parte de la muestra.

La Comisión añadirá también una nota al expediente para inspección por las partes interesadas en la que se plasme la selección de la muestra. Cualquier observación con respecto a la selección de la muestra debe recibirse en el plazo de tres días a partir de la fecha de notificación de la decisión sobre la muestra.

La Comisión, a fin de obtener la información que considere necesaria para su investigación, pondrá cuestionarios a disposición de los importadores no vinculados incluidos en la muestra. Salvo disposición en contrario, estas partes deberán presentar el cuestionario cumplimentado en un plazo de treinta días a partir de la fecha de notificación de la selección de la muestra.

En el expediente a disposición de las partes interesadas y en el sitio web de la Dirección General de Comercio ([https://trade.ec.europa.eu/tdi/case\\_details.cfm?id=2533](https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2533)) está disponible una copia del cuestionario dirigido a los importadores no vinculados.

#### **5.4. Procedimiento para determinar la probabilidad de continuación o reaparición del perjuicio**

A fin de determinar si es probable que continúe o reaparezca el perjuicio para la industria de la Unión, se invita a los productores del producto objeto de reconsideración de la Unión a participar en la investigación de la Comisión.

##### **5.4.1. Investigación de los productores de la Unión**

A fin de obtener la información que considere necesaria para su investigación en relación con los productores de la Unión, la Comisión pondrá un cuestionario a disposición del único productor de la Unión, HSWT France S.A.S.

Salvo disposición en contrario, este productor de la Unión deberá presentar el cuestionario debidamente cumplimentado en un plazo de treinta y siete días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.

Se invita a los productores de la Unión y a las asociaciones que los representen no enumeradas anteriormente a ponerse inmediatamente en contacto con la Comisión, preferiblemente por correo electrónico, a más tardar en el plazo de siete días después de la publicación del presente anuncio, con objeto de darse a conocer y solicitar un cuestionario.

En el expediente a disposición de las partes interesadas y en el sitio web de la Dirección General de Comercio ([https://trade.ec.europa.eu/tdi/case\\_details.cfm?id=2533](https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2533)) está disponible una copia del cuestionario dirigido a los productores de la Unión.

#### **5.5. Procedimiento de evaluación del interés de la Unión**

En caso de que se confirme la probabilidad de continuación o reaparición del dumping y de continuación o reaparición del perjuicio, la Comisión determinará, con arreglo al artículo 21 del Reglamento de base, si el mantenimiento de las medidas antidumping iría o no en detrimento del interés de la Unión.

Se invita a los productores de la Unión, a los importadores y a las asociaciones que los representen, a los usuarios y a las asociaciones que los representen, así como a los sindicatos y a las organizaciones que representen a los consumidores a que faciliten a la Comisión información sobre el interés de la Unión.

Salvo disposición en contrario, la información sobre la evaluación del interés de la Unión debe facilitarse en un plazo de treinta y siete días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio. Dicha información podrá facilitarse, bien en formato libre, o bien cumplimentando un cuestionario preparado por la Comisión.

En el expediente para inspección por las partes interesadas y en el sitio web de la Dirección General de Comercio ([https://trade.ec.europa.eu/tdi/case\\_details.cfm?id=2533](https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2533)) puede encontrarse una copia de los cuestionarios, incluido el cuestionario dirigido a los usuarios del producto objeto de reconsideración. En cualquier caso, la información facilitada con arreglo al artículo 21 del Reglamento de base solo se tendrá en cuenta si se presenta acompañada de pruebas fácticas que corroboren su validez.

#### 5.6. **Partes interesadas**

Para participar en la investigación, las partes interesadas, tales como los productores del país afectado, los productores de la Unión, los importadores y las asociaciones que los representen, los usuarios y las asociaciones que los representen, así como los sindicatos y las asociaciones que representen a los consumidores, deben demostrar primero que existe un nexo objetivo entre sus actividades y el producto objeto de reconsideración.

Los productores del país afectado, los productores de la Unión, los importadores y las asociaciones que los representen que hayan facilitado información con arreglo a los procedimientos descritos en los puntos 5.2, 5.3 y 5.4 se considerarán partes interesadas si existe un nexo objetivo entre sus actividades y el producto objeto de reconsideración.

Otras partes solo podrán participar en la investigación como parte interesada desde el momento en que se den a conocer, y a condición de que exista un nexo objetivo entre sus actividades y el producto objeto de reconsideración. La consideración de parte interesada se entiende sin perjuicio de la aplicación del artículo 18 del Reglamento de base.

El acceso al expediente disponible para inspección por las partes interesadas se efectúa a través de TRON.tdi, en la siguiente dirección: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>. Para acceder deben seguirse las instrucciones que figuran en esa página <sup>(12)</sup>.

#### 5.7. **Otra información presentada por escrito**

Se invita a todas las partes interesadas a que expongan sus puntos de vista, presenten la información oportuna y aporten pruebas justificativas en las condiciones establecidas en el presente anuncio. Salvo disposición en contrario, la información y las pruebas justificativas deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo de treinta y siete días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.

#### 5.8. **Posibilidad de audiencia con los servicios de investigación de la Comisión**

Todas las partes interesadas podrán solicitar audiencia con los servicios de investigación de la Comisión. Toda solicitud de audiencia debe hacerse por escrito, especificar los motivos de la solicitud e incluir un resumen de lo que la parte interesada desea discutir durante la audiencia. La audiencia se limitará a las cuestiones expuestas previamente por escrito por las partes interesadas.

En principio, las audiencias no se utilizarán para presentar información fáctica que todavía no esté en el expediente. No obstante, en interés de una buena administración, y para permitir a los servicios de la Comisión avanzar en la investigación, podrá indicarse a las partes interesadas que aporten nueva información fáctica después de una audiencia.

#### 5.9. **Instrucciones para presentar información por escrito y enviar los cuestionarios cumplimentados y la correspondencia**

La información presentada a la Comisión con vistas a las investigaciones de defensa comercial deberá estar libre de derechos de autor. Las partes interesadas, antes de presentar a la Comisión información o datos sujetos a derechos de autor de terceros, deberán solicitar al titular de dichos derechos un permiso específico que autorice a la Comisión, de forma explícita, a lo siguiente: a) utilizar la información y los datos necesarios para el presente procedimiento de defensa comercial, y b) suministrar la información o los datos a las partes interesadas en la presente investigación de forma que les permita ejercer su derecho de defensa.

Toda la información presentada por escrito para la que se solicite un trato confidencial, con inclusión de la información solicitada en el presente anuncio, los cuestionarios cumplimentados y la correspondencia de las partes interesadas, deberá llevar la indicación «Sensitive» <sup>(13)</sup> (confidencial). Se invita a las partes que presenten información en el curso de esta investigación a que indiquen los motivos para solicitar un trato confidencial.

Las partes interesadas que faciliten información confidencial («Sensitive») deberán proporcionar resúmenes no confidenciales de dicha información, con arreglo al artículo 19, apartado 2, del Reglamento de base, con la indicación «For inspection by interested parties» (para inspección por las partes interesadas). Estos resúmenes deberán ser suficientemente detallados para permitir una comprensión razonable del contenido de la información facilitada con carácter confidencial. Si una parte que presenta información confidencial no justifica suficientemente una solicitud de trato confidencial, o si presenta la información sin un resumen no confidencial con el formato y la calidad requeridos, la Comisión podrá no tener en cuenta esa información, salvo que se demuestre de manera convincente, a partir de fuentes apropiadas, que se trata de información exacta.

<sup>(12)</sup> En caso de problemas técnicos, contáctese con el servicio de asistencia de la Dirección General de Comercio (Trade Service Desk) por correo electrónico (dirección: [trade-service-desk@ec.europa.eu](mailto:trade-service-desk@ec.europa.eu)) o por teléfono (Tel. +32 22979797).

<sup>(13)</sup> Un documento con la indicación «Sensitive» se considera confidencial con arreglo al artículo 19 del Reglamento de base y al artículo 6 del Acuerdo de la OMC relativo a la aplicación del artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo Antidumping). Se considera también protegido con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43).

Se invita a las partes interesadas a que envíen toda la información y las solicitudes a través de la plataforma TRON.tdi (<https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>), incluidas las copias escaneadas de los poderes notariales y las certificaciones. Al utilizar TRON.tdi o el correo electrónico, las partes interesadas manifiestan su acuerdo con las normas aplicables a la información presentada por medios electrónicos contenidas en el documento «CORRESPONDENCIA CON LA COMISIÓN EUROPEA EN CASOS DE DEFENSA COMERCIAL», publicado en el sitio web de la Dirección General de Comercio: [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc\\_148003.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf). Las partes interesadas deberán indicar su nombre, dirección, número de teléfono y una dirección de correo electrónico válida, y asegurarse de que esta última es una dirección oficial en uso que se consulta a diario. Una vez facilitados los datos de contacto, la Comisión se comunicará con las partes interesadas únicamente mediante TRON.tdi o por correo electrónico, a no ser que estas soliciten expresamente recibir todos los documentos de la Comisión por otro medio de comunicación, o que la naturaleza del documento que se vaya a enviar exija el envío por correo certificado. En relación con otras normas y otra información sobre la correspondencia con la Comisión, incluidos los principios que se aplican a la información presentada a través de TRON.tdi o por correo electrónico, las partes interesadas deberán consultar las instrucciones de comunicación con las partes interesadas mencionadas anteriormente.

Dirección de la Comisión para la correspondencia:

Comisión Europea  
Dirección General de Comercio  
Dirección G  
Despacho: CHAR 04/039  
1049 Bruselas  
BÉLGICA

TRON.tdi: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi>

Correo electrónico:

Para cuestiones relacionadas con el dumping:

[TRADE-APM-DUMPING@ec.europa.eu](mailto:TRADE-APM-DUMPING@ec.europa.eu)

Para cuestiones relacionadas con el perjuicio:

[TRADE-APM-INJURY@ec.europa.eu](mailto:TRADE-APM-INJURY@ec.europa.eu)

## 6. Calendario de la investigación

La investigación se concluirá normalmente en un plazo de doce meses y, en cualquier caso, en un plazo máximo de quince meses a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, con arreglo al artículo 11, apartado 5, del Reglamento de base.

## 7. Presentación de información

Por regla general, las partes interesadas solo podrán presentar información en los plazos especificados en la sección 5 del presente anuncio.

Con objeto de finalizar la investigación dentro de los plazos obligatorios, la Comisión no aceptará información presentada por las partes interesadas pasado el plazo para la presentación de observaciones sobre la divulgación final, o, en su caso, pasado el plazo para presentar observaciones sobre la divulgación final complementaria.

## 8. Posibilidad de formular observaciones sobre la información presentada por otras partes

Con el fin de garantizar los derechos de defensa, las partes interesadas deben tener la posibilidad de formular observaciones sobre la información presentada por otras partes interesadas. Al hacerlo, las partes interesadas solo podrán abordar las cuestiones planteadas en la información presentada por esas otras partes interesadas, sin plantear nuevas cuestiones.

Salvo disposición en contrario, las observaciones sobre la información facilitada por otras partes interesadas en respuesta a la divulgación de las conclusiones definitivas deben presentarse en un plazo de cinco días a partir de la fecha límite para presentar observaciones sobre las conclusiones definitivas. Salvo disposición en contrario, si se produce una divulgación final complementaria, las observaciones de otras partes interesadas en relación con esta divulgación complementaria deben presentarse en el plazo de un día a partir de la fecha límite para presentar observaciones sobre esta divulgación complementaria.

El calendario señalado se entiende sin perjuicio del derecho de la Comisión a pedir información adicional a las partes interesadas en casos debidamente justificados.



## 9. Prórroga de los plazos especificados en el presente anuncio

Podrán concederse prórrogas de los plazos especificados en el presente anuncio a petición, debidamente justificada, de las partes interesadas.

Solo deberán solicitarse prórrogas de los plazos establecidos en el presente anuncio en circunstancias excepcionales, y únicamente se concederán si están debidamente justificadas. En cualquier caso, toda prórroga del plazo de respuesta a los cuestionarios se limitará normalmente a tres días y, por regla general, no excederá de siete. En cuanto a los plazos para la presentación de otra información especificada en el anuncio de inicio, las prórrogas se limitarán a tres días salvo que se demuestre la existencia de circunstancias excepcionales.

## 10. Falta de cooperación

Cuando una parte interesada deniegue el acceso a la información necesaria, no facilite dicha información en los plazos establecidos u obstaculice de forma significativa la investigación, las conclusiones, positivas o negativas, podrán formularse a partir de los datos disponibles, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base.

Si se comprueba que alguna de las partes interesadas ha facilitado información falsa o engañosa, podrá no tenerse en cuenta dicha información y hacerse uso de los datos disponibles.

Si una parte interesada no coopera o solo coopera parcialmente y, como consecuencia de ello, las conclusiones se basan en los datos disponibles, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de base, el resultado podrá ser menos favorable para ella de lo que habría sido si hubiera cooperado.

El hecho de no dar una respuesta por medios informatizados no se considerará una falta de cooperación, siempre que la parte interesada demuestre que presentar la respuesta de esta forma supondría un trabajo o un coste suplementario desproporcionados. Dicha parte debe ponerse inmediatamente en contacto con la Comisión.

## 11. Consejero Auditor

Las partes interesadas podrán solicitar la intervención del consejero auditor en los procedimientos comerciales. El consejero auditor revisa las solicitudes de acceso al expediente, las controversias sobre la confidencialidad de los documentos, las solicitudes de ampliación de los plazos y cualquier otra petición sobre los derechos de defensa de las partes interesadas y las terceras partes que pueda formularse durante el procedimiento.

El consejero auditor puede celebrar audiencias con las partes interesadas y mediar entre ellas y los servicios de la Comisión para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de defensa de las partes interesadas. Toda solicitud de audiencia con el Consejero Auditor deberá hacerse por escrito, especificando los motivos. El consejero auditor examinará los motivos de las solicitudes. Estas audiencias solo deben celebrarse si las cuestiones no han sido resueltas con los servicios de la Comisión a su debido tiempo.

Toda solicitud debe presentarse en su momento y con prontitud, a fin de no estorbar el correcto desarrollo de los procedimientos. Para ello, las partes interesadas deben solicitar la intervención del consejero auditor lo antes posible una vez que haya surgido el motivo que justifique su intervención. Cuando las solicitudes de audiencia se presenten fuera de los plazos pertinentes, el consejero auditor examinará también los motivos de ese retraso, la naturaleza de las cuestiones planteadas y la incidencia de esas cuestiones sobre los derechos de defensa, teniendo debidamente en cuenta los intereses de la buena administración y la compleción puntual de la investigación.

Las partes interesadas podrán encontrar más información, así como los datos de contacto, en las páginas web del Consejero Auditor, en el sitio web de la Dirección General de Comercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

## 12. Posibilidad de solicitar una reconsideración con arreglo al artículo 11, apartado 3, del Reglamento de base

Dado que la presente reconsideración por expiración se inicia conforme a lo dispuesto en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base, sus conclusiones no conducirán a la modificación de las medidas vigentes, sino a su derogación o a su mantenimiento de conformidad con el artículo 11, apartado 6, de ese mismo Reglamento.

Si cualquiera de las partes interesadas considera que está justificada una reconsideración de las medidas con vistas a su eventual modificación, podrá solicitar dicha reconsideración con arreglo al artículo 11, apartado 3, del Reglamento de base.

Las partes que deseen solicitar tal reconsideración, que se llevaría a cabo con independencia de la reconsideración por expiración objeto del presente anuncio, pueden ponerse en contacto con la Comisión en la dirección indicada anteriormente.

### 13. Tratamiento de datos personales

Todo dato personal obtenido en el transcurso de esta investigación se tratará de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo <sup>(14)</sup>.

En el sitio web de la Dirección General de Comercio figura un aviso de protección de datos que informa a todos los particulares acerca del tratamiento de los datos personales en el marco de las actividades de defensa comercial de la Comisión: <http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/>.

—

---

<sup>(14)</sup> Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).

## ANEXO

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/>     | Versión «confidencial»                       |
| <input type="checkbox"/>     | «Para inspección por las partes interesadas» |
| (marque la casilla adecuada) |  |

**RECONSIDERACIÓN POR EXPIRACIÓN DE LAS MEDIDAS ANTIDUMPING APLICABLES A LAS IMPORTACIONES DE ASPARTAMO ORIGINARIO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA**

**INFORMACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE IMPORTADORES NO VINCULADOS**

La finalidad del presente formulario es ayudar a los importadores no vinculados a facilitar la información solicitada para el muestreo en el punto 5.3.3 del anuncio de inicio.

Tanto la versión «confidencial» como la versión «para inspección por las partes interesadas» deberán remitirse a la Comisión según lo establecido en el anuncio de inicio.

**1. IDENTIDAD Y DATOS DE CONTACTO**

Indique los siguientes datos sobre su empresa:

Nombre de la empresa	
Dirección	
Persona de contacto	
Dirección de correo electrónico	
Teléfono	
Fax	

**2. VOLUMEN DE NEGOCIO Y VOLUMEN DE VENTAS**

Indique el volumen de negocios total en euros (EUR) de su empresa, así como el volumen de negocio y el peso que suponen las importaciones en la Unión y las ventas en el mercado de la Unión tras la importación desde China, durante el período de investigación de la reconsideración, de aspartamo, tal como se define en el anuncio de inicio, así como el peso correspondiente. Indique la unidad de peso utilizada.

	Toneladas	Valor en euros (EUR)
Volumen de negocios total de su empresa en euros (EUR)		
Importaciones en la Unión del producto objeto de reconsideración originario de China		
Reventas en el mercado de la Unión del producto objeto de reconsideración tras la importación desde China		

### 3. ACTIVIDADES DE SU EMPRESA Y DE LAS EMPRESAS VINCULADAS <sup>(1)</sup>

Detalle las actividades exactas de su empresa y de todas las empresas vinculadas (enumérelas e indique la relación con su empresa) que participan en la producción o la venta (exportaciones o ventas nacionales) del producto objeto de reconsideración. Estas actividades pueden incluir, entre otras cosas, la compra del producto objeto de reconsideración, su producción en régimen de subcontratación, su transformación o su comercialización.

Nombre de la empresa y ubicación	Actividades	Relación

### 4. OTRA INFORMACIÓN

Facilite cualquier otra información pertinente que usted considere útil para ayudar a la Comisión en la selección de la muestra.

### 5. CERTIFICACIÓN

Al facilitar la información mencionada, su empresa acepta su posible inclusión en la muestra. Si su empresa resulta seleccionada para formar parte de la muestra, deberá completar un cuestionario y aceptar una visita en sus instalaciones para verificar sus respuestas. Si su empresa se manifiesta en contra de su posible inclusión en la muestra, se considerará que no ha cooperado en la investigación. Las conclusiones de la Comisión sobre los importadores que no cooperen se basarán en los datos disponibles y el resultado podrá ser menos favorable para la empresa en cuestión de lo que habría sido si hubiera cooperado.

Firma del funcionario autorizado:

Nombre y cargo del funcionario autorizado:

Fecha:

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> De conformidad con el artículo 127 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión, se considera que dos personas están vinculadas en los siguientes casos: a) si una de ellas forma parte de la dirección o del consejo de administración de la empresa de la otra; b) si ambas tienen jurídicamente la condición de asociadas; c) si una es empleada de otra; d) si una tercera persona posee, controla o tiene, directa o indirectamente, el 5 % o más de las acciones o títulos con derecho a voto de una y otra; e) si una de ellas controla, directa o indirectamente, a la otra; f) si ambas son controladas, directa o indirectamente, por una tercera persona; g) si juntas controlan, directa o indirectamente, a una tercera persona; o h) si son miembros de la misma familia (DO L 343 de 29.12.2015, p. 558). Solo se considera que las personas son miembros de la misma familia si su relación de parentesco es una de las siguientes: i) marido y mujer; ii) ascendientes y descendientes en línea directa, en primer grado; iii) hermanos y hermanas (carnales, consanguíneos o uterinos); iv) ascendientes y descendientes en línea directa, en segundo grado; v) tío o tía y sobrino o sobrina; vi) suegros y yerno o nuera; y vii) cuñados y cuñadas. De conformidad con el artículo 5, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión, se entiende por «persona» toda persona física o jurídica, así como cualquier asociación de personas que no sea una persona jurídica pero cuya capacidad para realizar actos jurídicos esté reconocida por el Derecho nacional o de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).

**Anuncio de expiración de determinadas medidas antidumping**

(2021/C 303/10)

Al no haberse presentado ninguna solicitud de reconsideración debidamente justificada tras la publicación de un anuncio de expiración inminente <sup>(1)</sup>, la Comisión comunica que expirará la medida antidumping indicada a continuación.

El presente anuncio se publica de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea <sup>(2)</sup>.

Producto	Países de origen o de exportación	Medidas	Referencia	Fecha de expiración <sup>(1)</sup>
Barras de acero de refuerzo del hormigón muy resistentes a la fatiga	República Popular China	Derecho antidumping	Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1246 de la Comisión, de 28 de julio de 2016, por el que se establece un derecho antidumping definitivo a las importaciones de barras de acero de refuerzo del hormigón muy resistentes a la fatiga originarias de la República Popular China (DO L 204 de 29.7.2016, p. 70)	30.7.2021

<sup>(1)</sup> La medida expirará a las doce de la noche del día mencionado en esta columna.

<sup>(1)</sup> DO C 366 de 30.10.2020, p. 12.

<sup>(2)</sup> DO L 176 de 30.6.2016, p. 21.

## PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

# COMISIÓN EUROPEA

### AYUDA ESTATAL – ITALIA

#### Ayuda estatal SA.55678 (2019/NN) — Nuevo préstamo a Alitalia

#### Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2021/C 303/11)

Por carta de 28 de febrero de 2020, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con la medida antes citada.

Los interesados podrán presentar sus observaciones sobre la medida respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea  
Dirección General de Competencia  
Registro de Ayudas Estatales  
1049 Bruxelles/Brussel  
Fax +32 22961242  
Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Dichas observaciones se comunicarán a Italia. Los interesados que presenten observaciones podrán solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada de forma confidencial.

### TEXTO DEL RESUMEN

#### Procedimiento

En noviembre de 2019, la Comisión recibió dos denuncias relativas a un nuevo préstamo estatal de 400 millones EUR (en lo sucesivo, «el préstamo de 400 millones EUR») concedido por Italia a Alitalia S.A.I. S.p.A. in amministrazione straordinaria («Alitalia SAI») y Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria («Cityliner») (conjuntamente, «Alitalia»).

Los denunciantes alegaron que el préstamo era una ayuda estatal ilegal e incompatible, ya que fue concedido y desembolsado sin haber sido notificado y que, habida cuenta de la situación económica de Alitalia y de su historial, ningún acreedor en una economía de mercado habría estado dispuesto a conceder ese préstamo.

Anteriormente, en mayo de 2017, Italia había concedido a Alitalia un préstamo de 600 millones EUR. En el mismo mes, tres compañías aéreas presentaron denuncias formales alegando que el préstamo constituía una ayuda. Ese préstamo, concedido por el Estado, debía ser reembolsado antes del 5 de noviembre de 2017, fecha en la que debían venderse los activos de Alitalia. Dado que el procedimiento de venta fracasó, en octubre de 2017 Italia concedió a Alitalia otro

préstamo de 300 millones EUR. En enero de 2018, Italia notificó estos dos préstamos por un importe de 900 millones EUR (los «900 millones EUR») como ayuda de salvamento con arreglo a las Directrices de salvamento y reestructuración <sup>(1)</sup>. En abril de 2018, la Comisión incoó un procedimiento de investigación formal al considerar que, con carácter preliminar, los 900 millones EUR constituían una ayuda y que existían serias dudas sobre su compatibilidad con el mercado interior. Esta investigación está en curso.

### **Descripción de la ayuda respecto de la cual la Comisión incoa el procedimiento**

El 26 de octubre de 2019, Italia adoptó el Decreto-ley n.º 124, que preveía la concesión de un préstamo de 400 millones EUR en 2019 en favor de Alitalia y de las demás empresas del mismo grupo que también se encontraban en régimen de administración extraordinaria (a saber, Cityliner).

El 2 de diciembre de 2019, el Decreto-ley n.º 137 *Medidas urgentes para garantizar la continuidad del servicio prestado por Alitalia — Società Aerea Italiana S.p.A. y Alitalia Cityliner S.p.A. en régimen de administración extraordinaria* <sup>(2)</sup> derogó y sustituyó al artículo 54 del Decreto-ley n.º 124/2019 y confirmó la concesión del préstamo de 400 millones EUR previsto en el artículo 54 del Decreto-ley n.º 124/2019. El 30 de enero de 2020, la Ley n.º 2 *Conversión en ley, con modificaciones, del Decreto-ley n.º 137, de 2 de diciembre de 2019, por el que se establecen medidas urgentes para garantizar la continuidad del servicio prestado por Alitalia — Società Aerea Italiana S.p.A. y Alitalia Cityliner S.p.A. en régimen de administración extraordinaria* (en lo sucesivo, «Ley 2/2020») <sup>(3)</sup> modificó y convirtió en ley el Decreto-ley 137/2019.

El 16 de diciembre de 2019, la Comisión envió a Italia una carta en la que remitía a las autoridades italianas la segunda denuncia y, al no tener respuesta de las autoridades italianas a la solicitud de información enviada el 12 de noviembre de 2019, solicitaba una respuesta inmediata a la citada solicitud de información, en caso de que desearan formular observaciones. Italia respondió el 6 de enero de 2020.

Italia no ha notificado el préstamo de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

### **Evaluación de la medida**

La Comisión considera con carácter preliminar que la medida puede constituir una ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

En particular, sobre la base de la información de que dispone, la Comisión considera que el préstamo de 400 millones EUR podría haber otorgado una ventaja económica a Alitalia a efectos del artículo 107, apartado 1, del TFUE. La Comisión duda de que el criterio del operador en una economía de mercado sea aplicable en el presente asunto o de que, en cualquier caso, Italia haya actuado como un operador en una economía de mercado, guiado por consideraciones de rentabilidad, al conceder a Alitalia el préstamo de 400 millones EUR, habida cuenta, entre otras cosas, de lo siguiente:

- el reciente historial financiero de Alitalia, en particular no haber reembolsado los 900 millones EUR concedidos en 2017 ni pagado intereses por dicho importe;
- el flujo de tesorería negativo de Alitalia;
- la falta de pruebas que demuestren la solvencia de Alitalia en el mercado;
- la falta de un estudio contrafáctico que evalúe el interés del Estado en aumentar su exposición a Alitalia para garantizar la venta de sus activos en comparación con el escenario de liquidación de Alitalia, lo que probablemente habría ocurrido si no se hubiera concedido el préstamo de 400 millones EUR.

Italia no ha facilitado información que permita a la Comisión evaluar la compatibilidad del préstamo de 400 millones EUR.

<sup>(1)</sup> Comunicación de la Comisión - Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO C 249 de 31.7.2014, p. 1).

<sup>(2)</sup> Decreto Legge 2 de diciembre de 2019, n. 137 «Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria», Gazzetta ufficiale 2 de diciembre de 2019 n. 282.

<sup>(3)</sup> Legge 30 gennaio 2020, n. 2 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria» (GU Serie Generale no. 25, 31 de enero de 2020).

Dado que la Comisión considera que Alitalia es una empresa en crisis en el sentido de las Directrices de salvamento y reestructuración, solo podría evaluar la compatibilidad del préstamo de 400 millones EUR como ayuda de salvamento y reestructuración a tenor de dichas Directrices. Las Directrices de salvamento y reestructuración sientan las normas y requisitos para evaluar la compatibilidad de las ayudas de salvamento y reestructuración concedidas a empresas en crisis con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE. La Comisión ha llegado a la conclusión con carácter preliminar de que existen dudas sobre la compatibilidad de las medidas con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, entre otras, por las siguientes razones:

Italia no ha aportado pruebas que demuestren que el préstamo de 400 millones EUR se concedió para contribuir a un objetivo bien definido de interés común con el fin de evitar dificultades sociales o corregir las deficiencias del mercado restableciendo la viabilidad a largo plazo de la empresa.

El establecimiento del objetivo de interés común es un requisito previo para el análisis de otros criterios de compatibilidad establecidos en la sección 3 de las Directrices de salvamento y reestructuración. Por consiguiente, en esta fase del procedimiento, no puede demostrarse que fuera necesaria una intervención estatal para alcanzar tal objetivo, que la ayuda fuera adecuada, que tuviera efecto incentivador, que la ayuda se limitara al mínimo necesario y que no se produjeran efectos negativos indebidos sobre la competencia y el comercio entre los Estados miembros.

Además, cuando hayan transcurrido menos de diez años desde que anteriormente se concedieran al beneficiario ayudas de salvamento, ayudas de reestructuración o apoyo temporal de reestructuración, la Comisión no autorizará otras ayudas (principio de ayuda única). Dado que Alitalia puede haberse beneficiado de una ayuda de salvamento consistente en préstamos por un importe de 900 millones EUR concedidos en 2017, como se explica en la Decisión de incoación de 2018, la Comisión alberga serias dudas de que se haya respetado el principio de ayuda única.

Por las razones expuestas, la Comisión tiene dudas sobre la compatibilidad de la medida en cuestión con el mercado interior, por lo que ha decidido incoar el procedimiento de investigación formal con respecto al préstamo de 400 millones EUR.

De conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) 2015/1589 (\*) del Consejo, toda ayuda concedida ilegalmente puede ser recuperada de su beneficiario.

---

(\*) Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, sobre la aplicación de los artículos 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales (DO L 248 de 24.9.2015, p. 9).



## TESTO DE LA CARTA

Con la presente la Commissione desidera informare l'Italia che, dopo avere esaminato le informazioni a sua disposizione relative al prestito in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»).

## 1. PROCEDIMENTO

- (1) Nel maggio 2017 Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria («Alitalia SAI») e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria («Cityliner», una controllata regionale interamente detenuta da Alitalia) sono state poste in amministrazione straordinaria ai sensi della normativa nazionale in materia di insolvenza con decreti del ministero dello Sviluppo economico italiano, rispettivamente del 2 e del 12 maggio 2017, e dichiarate insolventi con sentenze rese dal Tribunale di Civitavecchia l'11 e il 26 maggio 2017. Ai fini della presente decisione, Alitalia SAI e Cityliner sono congiuntamente citate come «Alitalia».
- (2) Il 26 ottobre 2019 l'Italia ha adottato il decreto-legge n. 124 «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» («decreto-legge 124/2019») <sup>(5)</sup> il cui articolo 54 dispone la concessione, nel corso del 2019, di un prestito di 400 milioni di EUR a favore di Alitalia (il «prestito del 2019»).
- (3) Il 7 novembre 2019 un'impresa che desidera rimanere anonima ha presentato alla Commissione una denuncia (la «prima denuncia») con la quale asseriva che, con il prestito del 2019, l'Italia aveva concesso un aiuto di Stato illegale e incompatibile ad Alitalia.
- (4) Poiché il prestito del 2019 non era stato notificato, il 7 novembre 2019 la Commissione ha iscritto la denuncia nel registro degli aiuti di Stato non notificati.
- (5) Il 12 novembre 2019 la Commissione ha inviato alle autorità italiane una richiesta di informazioni relativa al presunto aiuto di Stato a favore di Alitalia con allegata la prima denuncia affinché potessero formulare le loro osservazioni al riguardo.
- (6) Il 27 novembre 2019 una seconda impresa che desidera rimanere anonima ha presentato alla Commissione una denuncia (la «seconda denuncia») di contenuto analogo alla prima, ovvero nella quale si asseriva che il prestito del 2019 costituiva un aiuto di Stato illegale e incompatibile.
- (7) Il 2 dicembre 2019, il decreto-legge n. 137 «Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria» ("decreto-legge 137/2019") <sup>(6)</sup> ha abrogato l'articolo 54 del decreto-legge 124/2019 e l'ha sostituito con una nuova disposizione che conferma la concessione del prestito del 2019.
- (8) Il 16 dicembre 2019 la Commissione ha inviato alle autorità italiane una lettera con la quale trasmetteva loro la seconda denuncia affinché potessero presentare eventuali osservazioni al riguardo e sollecitava una risposta immediata alla richiesta di informazioni del 12 novembre 2019.
- (9) Il 6 gennaio 2020 l'Italia ha replicato alla lettera della Commissione del 16 dicembre 2019. Nella risposta l'Italia ha fornito una sintesi dei principali sviluppi finanziari riguardanti Alitalia negli ultimi mesi del 2019 e ha affrontato alcuni punti sollevati nelle denunce in merito ai prestiti del 2019.

<sup>(5)</sup> Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 252 del 26 ottobre 2019).

<sup>(6)</sup> Decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, «Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria» (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 282 del 2 dicembre 2019).

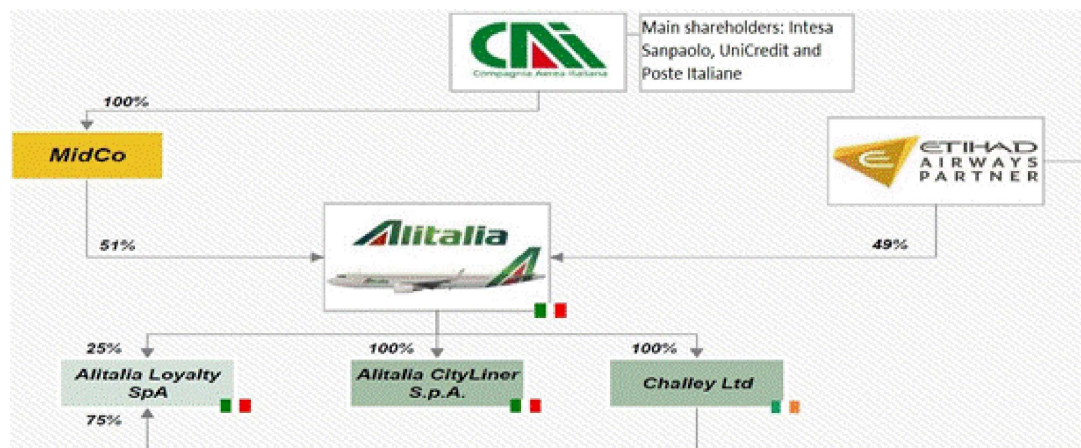
- (10) Il 30 gennaio 2020 la legge n. 2, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria» (la «legge 2/2020») <sup>(7)</sup>, ha modificato e convertito il decreto-legge 137/2019.

## 2. IL BENEFICIARIO DEL PRESTITO DEL 2019

- (11) Il beneficiario del prestito del 2019 è Alitalia come definita al punto (1), ossia Alitalia SAI e Cityliner.
- (12) Alitalia SAI è una società operante nel settore del trasporto aereo, con sede a Fiumicino (Roma). È detenuta al 49 % da Etihad Investment Holding Company LLC e al 51 % da MIDCO S.p.A. («Midco»), la quale, a sua volta, è di proprietà al 100 % di Compagnia Aerea Italiana S.p.A. («CAI»).
- (13) Quando è stata posta in amministrazione straordinaria, Alitalia SAI deteneva la totalità del capitale azionario di Alitalia Cityliner e di Challey Ltd («Challey»).
- (14) Cityliner è una compagnia aerea regionale interamente di proprietà di Alitalia SAI <sup>(8)</sup>, che opera in qualità di fornitore di capacità di trasporto (*capacity provider*) per Alitalia SAI <sup>(9)</sup> coprendo una parte della rete a corto raggio.
- (15) Challey è una sub-holding con sede in Irlanda che controlla diverse altre sub-holding, anch'esse con sede in Irlanda (congiuntamente: le «controllate irlandesi»), le quali possiedono l'intera flotta di aeromobili registrati in Irlanda utilizzata sia da Alitalia SAI che da Cityliner nonché partecipazioni di minoranza in altre società partecipate. Cityliner è un'impresa «captive» il cui reddito e rendimento finanziario dipendono direttamente dalla società madre, Alitalia SAI, la quale è il partner commerciale quasi esclusivo di Cityliner. Challey e le controllate irlandesi non sono in amministrazione straordinaria. Il grafico 1 illustra la struttura dell'azionariato di Alitalia e la tabella 1 mostra l'azionariato di Compagnia Aerea Italiana S.p.A. («CAI» <sup>(10)</sup>), che detiene il 51 % di Alitalia SAI tramite Midco al 16 ottobre 2017.

Grafico 1

### Struttura dell'azionariato del gruppo Alitalia



<sup>(7)</sup> Legge 30 gennaio 2020, n. 2, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria» (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 25 del 31 gennaio 2020).

<sup>(8)</sup> Cfr. il decreto del ministro dello Sviluppo economico del 12 maggio 2017, con il quale Cityliner è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, accessibile al pubblico sul sito Internet dell'amministrazione straordinaria: [www.falccoweb.it/home/pdf/alitalia/estensione\\_procedura.pdf](http://www.falccoweb.it/home/pdf/alitalia/estensione_procedura.pdf).

<sup>(9)</sup> Cfr. il punto 85 a pagina 55 e segg. della «Relazione sulle cause di insolvenza di Alitalia e Cityliner» del 26 gennaio 2018 redatta dai commissari straordinari e pubblicata sul sito Internet della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia: [http://www.falccoweb.it/home/pdf/alitalia/relazione\\_cause\\_insolvenza.pdf](http://www.falccoweb.it/home/pdf/alitalia/relazione_cause_insolvenza.pdf).

<sup>(10)</sup> Tra gli azionisti principali di CAI con una partecipazione pari o inferiore all'1 % figurano Factorit S.p.A. (1 %), Macca Srl (0,96 %) e la quota residua di Air France-KLM (0,73 % rispetto al 25 % nel 2009).

Tabella 1

**Struttura dell'azionariato di CAI, maggio 2019 Per quanto noto alla Commissione, la struttura dell'azionariato rimane invariata.**

Struttura dell'azionariato di CAI, maggio 2019	Azionisti
Unicredit S.p.A	36,59
Intesa Sanpaolo	27,48
Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni	9,11
Atlantia S.p.A	6,52
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A	6,11
MPS Leasing & Factoring S.p.A	3,97
IMMSI S.p.A	2,18
Poste Italiane S.p.A	2,02
PIRELLI & C.S.P.A.	1,4
Altri azionisti con meno dell'1%	4,62
<b>Totale</b>	<b>100</b>

- (16) Dall'acquisizione da parte di CAI S.p.A. nel 2008, il gruppo Alitalia ha costantemente registrato perdite. Ciò si riflette nella situazione finanziaria di Alitalia SAI e Cityliner che costituiscono la maggior parte delle attività finanziarie del gruppo. All'inizio del 2017 il gruppo Alitalia ha cercato di rimettersi in carreggiata con un ambizioso piano di riduzione dei costi di oltre [...] di EUR (il «piano di risanamento»), gestito principalmente dal suo azionista esistente Etihad, che avrebbe dovuto spianare la strada a un finanziamento supplementare (2 miliardi di EUR, di cui 900 milioni di EUR di fondi nuovi). Il piano di risanamento doveva essere attuato mediante una procedura prefallimentare <sup>(1)</sup> per la quale <sup>(2)</sup> era necessario ottenere l'accordo del personale <sup>(3)</sup>. L'accordo è stato tuttavia respinto in esito a un referendum aziendale tenutosi il 24 aprile 2017, poiché le misure proposte per ridurre i costi del lavoro prevedevano, tra l'altro, un taglio salariale medio del [...] %. Dato che non è stato possibile attuare il piano di risanamento e gli azionisti non hanno apportato finanziamenti supplementari, Alitalia ha dichiarato fallimento a norma della legge fallimentare italiana.
- (17) Di conseguenza, nel maggio 2017 (cfr. il punto (1)) Alitalia SAI è stata posta in amministrazione straordinaria <sup>(4)</sup> e dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Civitavecchia.

<sup>(1)</sup> Articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 — Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 81 del 6 aprile 1942) (la «legge fallimentare italiana»).

<sup>(2)</sup> Un «piano attestato di risanamento» a norma dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare italiana è una procedura per le imprese che si trovano in difficoltà finanziarie temporanee, ovvero difficoltà finanziarie che possono essere superate data la loro specifica natura reversibile e la disponibilità di risorse adeguate. Secondo tale procedura, gli sforzi di risanamento sono gestiti dall'impresa e non dal giudice.

<sup>(3)</sup> Secondo la relazione dei commissari straordinari dell'11 luglio 2018, al 31 dicembre 2017, il gruppo Alitalia registrava 11 755 contratti di lavoro corrispondenti a 10 871 dipendenti a tempo pieno occupati presso Alitalia S.p.A. e Cityliner. Il 31 dicembre 2016 vi erano 10 781 equivalenti a tempo pieno alle dipendenze del gruppo Alitalia.

<sup>(4)</sup> Alitalia e Cityliner sono state poste in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 298 del 24 dicembre 2003) in combinato disposto con il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274» (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 185 del 9 agosto 1999). Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 disciplina la procedura di amministrazione straordinaria, ovvero una procedura di insolvenza per le grandi imprese finalizzata al salvataggio e alla conservazione del loro valore attraverso la prosecuzione delle attività fino alla ristrutturazione o alla cessione degli attivi. Le imprese sono ammesse all'amministrazione straordinaria solo qualora si ritenga possibile che ritrovino una situazione di redditività economica.

- (18) Alitalia SAI ha controllato la gestione di Cityliner e ne ha coordinato le attività fino all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. In seguito all'insolvenza di Alitalia SAI, anche Cityliner è stata dichiarata insolvente <sup>(15)</sup> e, ai sensi delle disposizioni che consentivano l'estensione dell'amministrazione straordinaria alle società del gruppo Alitalia <sup>(16)</sup>, è stata ammessa all'amministrazione straordinaria.

### 3. IL PRESTITO DEL 2019

- (19) Il prestito del 2019 è stato disposto dall'articolo 54 del decreto-legge 124/2019 (cfr. il punto (2)). Si tratta di un prestito di 400 milioni di EUR concesso a favore di Alitalia.
- (20) Ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 124/2019, il prestito del 2019 è prioritario rispetto a ogni altro debito contratto da Alitalia in amministrazione straordinaria e rispetto a tutti i debiti contratti prima che Alitalia fosse posta in amministrazione straordinaria. Il prestito del 2019 è concesso con applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi, maggiorato di 1 000 punti base, ed è da restituirsi entro sei mesi dall'erogazione.
- (21) Il 2 dicembre 2019 l'Italia ha adottato il decreto-legge 137/2019 (cfr. il punto (7)) che abroga e sostituisce l'articolo 54 del decreto-legge 124/2019. Il decreto-legge 137/2019 ha in sostanza ripreso le disposizioni su cui si fonda il prestito del 2019, specificando ad integrazione che lo scopo del prestito era di consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia. Il decreto-legge 137/2019 disponeva altresì che il programma di cessione fosse integrato da un piano di riorganizzazione volto a ristrutturare e razionalizzare le attività aziendali di Alitalia; tale piano doveva essere elaborato dal commissario straordinario ed era soggetto all'approvazione del ministero dello Sviluppo economico ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274» <sup>(17)</sup>. Il termine per espletare la procedura necessaria per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali di Alitalia, a seguito dell'esecuzione del piano di riorganizzazione, è stato fissato al 31 maggio 2020.
- (22) Con decreto del ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, del 21 dicembre 2019, è stata disposta l'erogazione integrale ad Alitalia del prestito del 2019.
- (23) La legge 30 gennaio 2020, n. 2, ha convertito il decreto-legge 137/2019. La legge 2/2020 apporta le seguenti modificazioni al decreto-legge 137/2019: i) precisa che il prestito e gli interessi devono essere rimborsati entro sei mesi dall'erogazione; ii) dispone che il programma elaborato dall'organo commissariale tenga conto dei livelli occupazionali e dell'unità operativa dei complessi aziendali.

### 4. INFORMAZIONI GENERALI

- (24) Prima dell'erogazione del prestito del 2019, nel maggio 2017 l'Italia aveva concesso ad Alitalia un prestito di 600 milioni di EUR <sup>(18)</sup> che nell'ottobre 2017 era stato integrato da un prestito aggiuntivo di 300 milioni di EUR (i "prestiti del 2017). La restituzione dei prestiti del 2017 era prevista rispettivamente entro il 5 novembre 2017 e il 31 dicembre 2018.
- (25) Al fine di elaborare il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 270/1999, i commissari straordinari hanno pubblicato nel maggio 2017 un invito per la raccolta di manifestazioni di interesse per l'acquisizione o la ristrutturazione dei complessi aziendali di Alitalia <sup>(19)</sup>. Nell'agosto 2017 i commissari straordinari hanno inoltre lanciato una procedura di cessione, in un primo momento cercando di cedere le attività Alitalia attraverso una procedura di manifestazione di interesse. Il termine per il completamento della procedura di manifestazione di interesse al fine di consentire la cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia è stato rinviato più volte e la procedura è stata infine convertita in una procedura negoziata. Le date di

<sup>(15)</sup> Cfr. la pagina 57 e segg. della «Relazione sulle cause di insolvenza di Alitalia e Cityliner», del 26 gennaio 2018, redatta dai commissari straordinari; cfr. anche la sentenza del 26 maggio 2019 che dichiara l'insolvenza di Cityliner. Tali documenti sono consultabili pubblicamente: [http://www.fallcoweb.it/home/pdf/alitalia/sentenza\\_cityliner.pdf](http://www.fallcoweb.it/home/pdf/alitalia/sentenza_cityliner.pdf); [http://www.fallcoweb.it/home/pdf/alitalia/relazione\\_cause\\_insolvenza.pdf](http://www.fallcoweb.it/home/pdf/alitalia/relazione_cause_insolvenza.pdf)

<sup>(16)</sup> Come previsto all'articolo 81 del decreto-legge 270/1999. Cfr. il punto 1.

<sup>(17)</sup> Cfr. la nota 1.

<sup>(18)</sup> Il prestito iniziale del 2017 a favore di Alitalia era stato disposto dal decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55 («Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.») (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 100 del 2 maggio 2017). Sebbene il decreto-legge 55/2017 sia scaduto e sia divenuto nullo perché non convertito in legge entro il termine previsto, i suoi effetti sono stati mantenuti dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

<sup>(19)</sup> Conformemente agli orientamenti previsti dal decreto legislativo 270/1999, articolo 27, comma 2, lettere a), b) e b) bis).

scadenza per il rimborso dei prestiti del 2017 sono state sincronizzate <sup>(20)</sup> e prorogate diverse volte. Da ultimo il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 <sup>(21)</sup> ha disposto, tra l'altro, la proroga del rimborso dei prestiti del 2017 fino a quando i compendi aziendali di Alitalia non sarebbero stati ceduti dall'amministrazione straordinaria e ha sospeso l'ulteriore cumulo di interessi sui prestiti del 2017.

- (26) A ogni proroga delle date di scadenza del rimborso dei prestiti del 2017 è corrisposto il rinvio del relativo termine per l'espletamento della procedura della cessione dei complessi aziendali di Alitalia. Il termine per presentare un'offerta vincolante è stato rinviato a più riprese, da ultimo al 21 novembre 2019. Poiché entro tale termine non sono presentate offerte vincolanti, la summenzionata procedura di cessione è stata considerata fallita <sup>(22)</sup>.
- (27) Il 2 dicembre 2019, con il decreto-legge 137/2019, è stato disposto di adottare una nuova procedura di cessione da associare a un piano di riorganizzazione e di espletare entro il 31 maggio 2020 le procedure necessarie per la cessione dei complessi aziendali di Alitalia a seguito dell'attuazione di detto piano.

#### 5. SINTESI DELLA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL 2018 RELATIVA AI PRESTITI DEL 2017

- (28) Nel 2017 e nel 2018 la Commissione ha ricevuto una serie di denunce nelle quali si asseriva che i prestiti del 2017 e le rispettive proroghe costituivano aiuti di Stato illegali e incompatibili.
- (29) Il 23 gennaio 2018 l'Italia ha notificato i prestiti del 2017 come aiuti per il salvataggio ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (gli «orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione») <sup>(23)</sup>.
- (30) Con lettera del 23 aprile 2018, la Commissione ha informato l'Italia della propria decisione di avviare il procedimento a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, in relazione ai prestiti del 2017 (la «decisione di avvio del procedimento del 2018») <sup>(24)</sup>.
- (31) La Commissione ha concluso in via provvisoria che: i) i prestiti del 2017 possono aver costituito aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE; ii) sussistevano seri dubbi circa la compatibilità con il mercato interno dei prestiti del 2017.
- (32) In particolare, a parere della Commissione era possibile che i prestiti del 2017 avessero conferito un vantaggio economico ad Alitalia ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. A parere della Commissione, le autorità italiane non avevano suffragato con elementi di prova l'affermazione secondo cui, nel concedere i prestiti del 2017, l'Italia avrebbe agito come un operatore in un'economia di mercato.
- (33) La Commissione ha ritenuto che Alitalia fosse un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione ed è giunta in via provvisoria alla conclusione che sussistevano seri dubbi circa la compatibilità dei prestiti del 2017 con il mercato interno.

#### 6. LA POSIZIONE DELLE DENUNCIANTI IN MERITO AL PRESTITO DEL 2019

- (34) Nelle loro osservazioni relative al prestito del 2019, le denuncianti sostengono che tale prestito costituisce un aiuto di Stato illegale e incompatibile.

<sup>(20)</sup> Tramite il decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38.

<sup>(21)</sup> Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 100 del 30 aprile 2019). Il decreto-legge 34/2019 è stato convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 29 giugno 2019 - Suppl. Ordinario n. 26).

<sup>(22)</sup> Nelle osservazioni presentate il 6 gennaio 2020, al punto 2, lettera b), le autorità italiane hanno dichiarato che non era loro pervenuta alcuna offerta finale entro il termine stabilito dalla legge. La notizia è stata diffusa anche dalla stampa: si veda ad esempio «Il Corriere della sera» del 21 novembre 2019: «Alitalia, il salvataggio salta ancora: ottavo rinvio per la cordata»; «la Repubblica» del 20 novembre 2019: «Si ferma la cordata Fs-Atlantia. Alitalia verso l'ottavo rinvio»; «la Repubblica» del 26 novembre 2019: «Alitalia, la resa del governo. Patuanelli: la soluzione di mercato non c'è».

<sup>(23)</sup> Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

<sup>(24)</sup> Aiuti di Stato — Italia — Aiuto di Stato SA.48171 (2018/C) (ex 2018/NN, ex 2017/FC) — Presunto aiuto di Stato a favore di Alitalia — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C/2018/2357) (GU C 256, del 20.7.2018, pag. 4).

- (35) Le denuncianti affermano che il prestito del 2019 costituisce un aiuto di Stato poiché il governo italiano non ha agito come un investitore operante in un'economia di mercato. Dato che, nonostante i prestiti del 2017, la situazione economica di Alitalia non è migliorata, e alla luce della storia di Alitalia, secondo le denuncianti i dubbi già espressi dalla Commissione nella decisione di avvio del 2018 sui prestiti del 2017 si applicherebbero a maggior ragione al prestito del 2019 <sup>(25)</sup>. A loro avviso, nessun investitore operante in un'economia di mercato attento ai problemi di redditività sarebbe stato infatti disposto ad aumentare la propria esposizione creditizia fornendo tali nuovi finanziamenti senza garanzia alcuna in merito alla remunerazione del capitale investito.
- (36) Le denuncianti ritengono che il prestito statale concesso dal governo italiano ad Alitalia abbia senza alcun dubbio conferito un vantaggio ad Alitalia, abbia inciso in modo rilevante sugli scambi tra Stati membri e falsato la concorrenza, dato che Alitalia è in concorrenza con altre compagnie aeree dell'UE. A loro parere, il prestito del 2019 avrebbe di fatto consentito alla società di rimanere operativa nonostante il protrarsi della difficile situazione finanziaria e di mantenere e persino aumentare la propria quota di mercato grazie all'incremento delle capacità e all'apertura di determinate rotte, mettendola così in grado di continuare ad applicare una politica tariffaria più aggressiva di quella che avrebbe potuto praticare senza il prestito del 2019 e causando gravi danni alle società concorrenti che operavano sulle medesime rotte senza sovvenzioni pubbliche.
- (37) In particolare, le denuncianti sottolineano che, nonostante i cospicui contributi pubblici ricevuti, Alitalia non è stata in grado di effettuare alcuna ristrutturazione, non riuscendo a diventare redditizia né a ridurre i costi o i debiti.
- (38) Le denuncianti sostengono che il prestito del 2019 è incompatibile con il mercato interno. Diversi criteri di compatibilità definiti negli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione non sono stati rispettati.

#### 7. LA POSIZIONE DELLE AUTORITÀ ITALIANE IN MERITO AL PRESTITO DEL 2019

- (39) Il 6 gennaio 2020 l'Italia ha risposto a una serie di punti sollevati nelle denunce, asserendo al contempo che il prestito del 2019 rappresenta un sostegno finanziario a favore di Alitalia. In primo luogo, l'Italia ha affermato che lo strumento giuridico oggetto delle denunce, vale a dire il decreto-legge 124/2019, non era stato convertito in legge ed era pertanto privo di efficacia *ab initio*. Secondo l'Italia lo strumento giuridico alla base del prestito del 2019 è il decreto-legge 137/2019, il cui oggetto è diverso da quello del decreto-legge 124/2019, in quanto il nuovo finanziamento ivi previsto era subordinato al ripristino della redditività a lungo termine attraverso la cessione della società ristrutturata. Le denunce sarebbero pertanto prive di oggetto.
- (40) A parere dell'Italia il prestito del 2019 non costituiva un aiuto illegale, bensì una tranche supplementare dell'aiuto notificato nel gennaio 2018 (cfr. il punto (29)), rappresentando quindi un'estensione dei prestiti del 2017. Secondo l'Italia, tale prestito non era pertanto soggetto all'obbligo di sospensione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Di conseguenza, l'Italia ha espresso il parere che il prestito del 2019 debba essere esaminato nell'ambito dell'indagine aperta con la decisione di avvio del procedimento del 2018.

#### 8. VALUTAZIONE

##### 8.1. Osservazioni preliminari

- (41) La Commissione è dell'avviso che anche se le denunce fossero ritenute senza oggetto, tale conclusione non avrebbe alcun effetto materiale sulla presente indagine. A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea <sup>(26)</sup> (il «regolamento di procedura»), la Commissione può, di propria iniziativa, esaminare informazioni su presunti aiuti illegali provenienti da qualsiasi fonte.
- (42) Inoltre, l'Italia ha sostenuto che il prestito del 2019 è in realtà una tranche aggiuntiva dei prestiti del 2017 e che pertanto la Commissione dovrebbe esaminare il prestito del 2019 nell'ambito dell'indagine aperta con decisione di avvio del 2018.

<sup>(25)</sup> La denuncia contiene copia di un'intervista al vicepresidente della Banca europea per gli investimenti, pubblicata da Radiocor Economia il 26 settembre 2019, in cui si affermava che Alitalia non aveva ancora le caratteristiche necessarie per essere finanziabile dalle banche.

<sup>(26)</sup> GUL 248 del 24.9.2015, pag. 9.

- (43) Per corroborare tale argomentazione, l'Italia ha richiamato il punto 81 della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato <sup>(27)</sup>, il quale dispone che «*più interventi consecutivi dello Stato possono essere considerati un solo intervento ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso in cui interventi consecutivi siano connessi tra loro — segnatamente per la loro cronologia, il loro scopo e la situazione dell'impresa al momento in cui si verificano — in modo tanto stretto da renderne impossibile la dissociazione*». Secondo l'Italia, è impossibile dissociare il prestito del 2019 dai prestiti del 2017 dato che le argomentazioni espresse nel decreto-legge 137/2019 per la concessione del prestito del 2019 corrispondono alle motivazioni addotte per la concessione dei prestiti del 2017 nei corrispondenti atti legislativi che dispongono i prestiti del 2017.
- (44) La Commissione osserva che il punto 81 della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato stabilisce anche: «[p]er contro, se l'intervento successivo è stato il risultato di eventi impreveduti all'epoca del primo intervento, le due misure dovrebbero in linea di principio essere valutate separatamente.» (corsivo e sottolineatura aggiunti).
- (45) La Commissione conclude in via provvisoria che il prestito del 2019 sia separabile dai prestiti del 2017 per i motivi indicati di seguito.
- (46) In primo luogo, il decreto-legge 148/2017, con il quale l'Italia ha concesso il prestito aggiuntivo di 300 milioni di EUR, afferma esplicitamente che si tratta di un aumento del finanziamento statale di 600 milioni di EUR già erogato nel maggio 2017 fino a raggiungere l'importo di 900 milioni di EUR <sup>(28)</sup>. Per contro, il decreto-legge 124/2019, il decreto-legge 137/2019 o la legge 2/2020 non fanno alcun riferimento ad un eventuale collegamento con i prestiti concessi nel 2017.
- (47) In secondo luogo, per quanto riguarda la cronologia, la Commissione osserva che, mentre i prestiti del 2017 sono stati concessi a distanza di sei mesi l'uno dall'altro, il prestito del 2019 è stato concesso due anni dopo il prestito precedente. Il prestito del 2019 è dissociabile dai prestiti del 2017, in quanto si è reso necessario solo molto tempo dopo i prestiti del 2017 e si riferisce al finanziamento di costi che non potevano ragionevolmente essere previsti nel momento in cui Alitalia era stata inizialmente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria <sup>(29)</sup>.
- (48) In terzo luogo, i termini dei prestiti del 2017 e del prestito del 2019 sono sostanzialmente diversi. Da un lato, la data di scadenza per la restituzione dei prestiti del 2017 è stata rinviata *sine die* fino a dopo la vendita delle attività di Alitalia. Per contro, la data di scadenza per la restituzione del prestito del 2019 è attualmente fissata a sei mesi dalla sua erogazione. Dall'altro, dal maggio 2019, nessun ulteriore interesse sta maturando sui prestiti del 2017, mentre l'interesse è previsto sul prestito del 2019.
- (49) La Commissione conclude pertanto in via provvisoria che il prestito concesso nel 2019 è dissociabile dai prestiti del 2017 e che occorra avviare un distinto procedimento di indagine formale in merito al prestito del 2019.

## 8.2. Presenza di aiuti di Stato

- (50) In virtù dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, «*sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza*».
- (51) Ne consegue che affinché una misura possa costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, devono essere soddisfatti i criteri cumulativi elencati di seguito: i) deve essere concessa dallo Stato o mediante risorse statali ed essere imputabile allo Stato; ii) deve conferire un vantaggio ad un'impresa; iii) deve essere selettiva, ossia favorire talune imprese o la produzione di determinati beni; iv) deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza ed essere atta a incidere sugli scambi tra Stati membri <sup>(30)</sup>.

<sup>(27)</sup> Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C/2016/2946) (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1).

<sup>(28)</sup> L'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 148/2017 dispone che «... l'ammontare del finanziamento ... è incrementato di 300 milioni di euro, da erogarsi nell'anno 2018».

<sup>(29)</sup> Cfr., in proposito, la decisione della Commissione del 19 dicembre 2012 nel caso SA.35378 *Financing of Berlin Brandenburg Airport*, Germania (GU C 36 dell'8.2.2013, pag. 10), punti da 14 a 33.

<sup>(30)</sup> Sentenza del 2 settembre 2010, *Commissione/Deutsche Post*, C-399/08 P, EU:C:2010:481, punto 39 e giurisprudenza ivi citata.

### 8.2.1. *Nozione di impresa*

- (52) Alitalia SAI è un'impresa privata con sede in Italia che opera e fornisce servizi nel settore del trasporto aereo. È un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE <sup>(31)</sup>. Anche Cityliner è una società privata che opera nel settore del trasporto aereo e fornisce servizi di trasporto di passeggeri a livello regionale; anch'essa è un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

### 8.2.2. *Imputabilità e risorse statali*

- (53) Per configurarsi come aiuto di Stato, una misura deve essere imputabile allo Stato ed essere finanziata mediante risorse statali.
- (54) Poiché il prestito del 2019 è concesso mediante atti legislativi (cfr. la sezione 3), la Commissione conclude in via provvisoria che il prestito sia imputabile allo Stato italiano. Inoltre, poiché esso è finanziato dal bilancio dello Stato, la Commissione conclude in via provvisoria che sia stato concesso mediante risorse statali.

### 8.2.3. *Selettività*

- (55) Per essere considerata un aiuto di Stato una misura deve essere specifica o selettiva, nel senso di avvantaggiare soltanto certe imprese o la produzione di certi beni.
- (56) Il prestito del 2019 è stato concesso in modo specifico ad Alitalia. Pertanto, esso è stato concesso, su base esclusivamente ad hoc, a due specifiche imprese appartenenti al medesimo gruppo e non era disponibile per altre imprese attive nel settore del trasporto aereo italiano che si trovano in una situazione di diritto e di fatto analoga, o in altri settori. Nessuna società comparabile era ammessa a beneficiare di misure simili a quelle concesse e, pertanto, nessuna di tali società ha ricevuto un vantaggio analogo.
- (57) Inoltre, come stabilito dalla Corte, in caso di concessione di un aiuto individuale, l'individuazione del vantaggio economico (cfr. la sezione 8.2.4) consente, in linea di principio, di presumerne la selettività <sup>(32)</sup>.
- (58) Conseguentemente la Commissione conclude in via provvisoria che il prestito del 2019 ha natura selettiva.

### 8.2.4. *Vantaggio*

- (59) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, per vantaggio s'intende un beneficio economico che un'impresa non avrebbe potuto ottenere in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di un intervento dello Stato <sup>(33)</sup>.
- (60) Secondo la giurisprudenza dell'Unione europea, le operazioni economiche realizzate da un ente pubblico non conferiscono un vantaggio e pertanto non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, se hanno luogo in normali condizioni di mercato <sup>(34)</sup>. Al fine di determinare se un'operazione è stata eseguita in tali condizioni, la Commissione applica il principio dell'operatore in un'economia di mercato, che è stato sviluppato in relazione a diverse operazioni economiche. La Commissione esaminerà dapprima se il criterio dell'operatore in un'economia di mercato è applicabile e, in caso affermativo, lo applicherà al prestito statale del 2019.

<sup>(31)</sup> Sulla definizione di impresa si richiama la sezione 2 della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato, in particolare il punto 7: "Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica ....

<sup>(32)</sup> Cfr. sentenza del 4 giugno 2015, *Commissione/MOL*, C-15/14 P, EU:C:2015:362, punto 60.

<sup>(33)</sup> Sentenza dell'11 luglio 1996, *SFEI e Altri*, C-39/94, EU:C:1996:285, punto 60; Sentenza del 29 aprile 1999, *Spagna/Commissione*, C-342/96, EU:C:1999:210, punto 41.

<sup>(34)</sup> Sentenza dell'11 luglio 1996, *SFEI e Altri*, C-39/94, EU:C:1996:285, punti 60 e 61.



## 8.2.4.1. Applicabilità del criterio dell'operatore in un'economia di mercato

- (61) La Commissione esaminerà l'applicabilità del criterio dell'operatore in un'economia di mercato sotto due aspetti, per valutare i) se lo Stato ha agito in qualità di autorità pubblica anziché come operatore economico al momento della concessione dei prestiti e ii) se l'Italia ha presentato elementi di prova ex ante sufficienti per dimostrare di aver agito come un operatore economico.
- (62) In primo luogo, la Commissione ricorda che la Corte di giustizia ha stabilito che l'applicabilità del criterio dell'operatore in un'economia di mercato dipende, in definitiva, dal fatto che lo Stato membro interessato concede, nella sua qualità di azionista e non nella sua qualità di potere pubblico, un vantaggio economico a un'impresa a esso appartenente <sup>(35)</sup>. Gli interventi dello Stato diretti ad onorare gli obblighi che ad esso incombono come autorità pubblica non si possono paragonare a quelli di un operatore in un'economia di mercato <sup>(36)</sup>.
- (63) I comunicati stampa rilasciati dopo la concessione del prestito indicherebbero che l'Italia sembrava basarsi su considerazioni che un operatore di mercato non avrebbe tenuto in considerazione.
- (64) Il 28 novembre 2019, il ministro dello Sviluppo economico ha dichiarato che Alitalia «non fallirà, mi sento di poterlo garantire» <sup>(37)</sup>.
- (65) Il 17 dicembre 2019 lo stesso ministro ha dichiarato alla stampa che «ci sono criticità [con riguardo ad Alitalia] da affrontare in modo serio», partendo dal fatto che «non prendo in considerazione l'idea di mettere aerei a terra» <sup>(38)</sup>.
- (66) In secondo luogo, quando uno Stato membro invoca il criterio dell'operatore in un'economia di mercato nel procedimento amministrativo, spetta allo Stato membro stesso «provare inequivocabilmente e sulla base di elementi oggettivi, verificabili e contemporanei, che la misura attuata rientrava nella sua qualità di azionista e che è fondata sulle valutazioni economiche preliminari richieste» <sup>(39)</sup>. Tali elementi devono fare chiaramente apparire che lo Stato membro interessato ha preso, preliminarmente o simultaneamente alla concessione del beneficio economico, la decisione di procedere, con la misura effettivamente posta in essere, ad un investimento nell'impresa pubblica controllata.
- (67) Inoltre, «ai fini della valutazione della questione di sapere se la stessa misura sarebbe stata adottata, in normali condizioni di mercato, da un investitore privato operante in una situazione la più analoga possibile a quella dello Stato, devono essere presi in considerazione unicamente i benefici e gli obblighi connessi alla posizione di quest'ultimo nella sua qualità di azionista, ad esclusione di quelli connessi alla sua qualità di potere pubblico» <sup>(40)</sup>.
- (68) Nonostante le richieste della Commissione l'Italia non ha presentato alcun documento che dimostri che lo Stato, prima di concedere il prestito del 2019, ha effettuato una valutazione della potenziale redditività dell'investimento e della probabilità della restituzione di tale prestito.
- (69) Per questi motivi, la Commissione conclude, in via provvisoria, che il criterio dell'operatore in un'economia di mercato non potesse essere applicabile allo Stato per quanto riguarda il prestito del 2019 in quanto: i) concedendo il prestito del 2019 ad Alitalia, l'Italia sembra aver agito in veste di autorità pubblica, e ii) in ogni caso, l'Italia non ha assolto l'onere di dimostrare di aver effettuato una valutazione ex ante della redditività di tale prestito.

<sup>(35)</sup> Sentenza del 5 giugno 2012, *Commissione/RDF*, C-124/10 P, EU:C:2012:318, punti 79-82 e 87.

<sup>(36)</sup> Sentenza del 15 dicembre 2009, *EDF/Commissione*, T-156/04, EU:T:2009:505, punto 228.

<sup>(37)</sup> [https://www.ilmessaggero.it/economia/news/alitalia\\_patuanelli\\_non\\_fallira\\_nazionalizzazione\\_non\\_negativa-4892078.html](https://www.ilmessaggero.it/economia/news/alitalia_patuanelli_non_fallira_nazionalizzazione_non_negativa-4892078.html)

<sup>(38)</sup> [http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Alitalia-Leogrande-domani-entrero-in-azienda-non-faro-disastri-45f19058-ff0f-42d2-9532-5446204b197d.html?refresh\\_ce](http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Alitalia-Leogrande-domani-entrero-in-azienda-non-faro-disastri-45f19058-ff0f-42d2-9532-5446204b197d.html?refresh_ce)

<sup>(39)</sup> Sentenza del 16 gennaio 2018, *EDF / Commissione*, T-747/15, EU:T:2018:6, punto 142, e sentenza del 19 dicembre 2019, *Arriva Italia Srl e a.*, C-385/18, EU:C:2019:1121, punto 48.

<sup>(40)</sup> Sentenza del 19 dicembre 2019 *Arriva Italia Srl e a.*, C-385/18, EU:C:2019:1121, punto 47, e sentenza del 5 giugno 2012, *Commissione / EDF*, C-124/10 P, EU:C:2012:318, punto 79 e giurisprudenza ivi citata.

## 8.2.4.2 Applicazione del criterio dell'operatore in un'economia di mercato

- (70) Per completezza, anche se nella sezione 8.2.4.1 la Commissione ha concluso in via provvisoria che il criterio dell'operatore in un'economia di mercato non è applicabile, la Commissione ha esaminato, in subordine, se detto criterio sarebbe stato soddisfatto.
- (71) L'elemento dirimente è piuttosto stabilire se, nel concedere il prestito, gli enti pubblici abbiano o non abbiano agito come avrebbe agito un operatore in un'economia di mercato in una situazione analoga. Inoltre, il comportamento economico può essere diverso a seconda che esista o no un'esposizione nei confronti dell'impresa. Tuttavia, se l'ente pubblico non avesse agito come un operatore in un'economia di mercato, l'impresa beneficiaria avrebbe ricevuto un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni di mercato normali <sup>(41)</sup> e che l'ha posta in una posizione più favorevole rispetto ai suoi concorrenti <sup>(42)</sup>.
- (72) Sulla base delle informazioni di cui dispone, concernenti la situazione finanziaria di Alitalia e le circostanze in cui il prestito del 2019 è stato concesso nell'ottobre 2019, la Commissione dubita che le condizioni alle quali è stato concesso il prestito del 2019 soddisfino il criterio dell'operatore in un'economia di mercato e che l'Italia, nel concedere detto prestito ad Alitalia, abbia agito come un creditore prudente, guidato da considerazioni di redditività.
- (73) In primo luogo, la Commissione in via provvisoria ritiene improbabile che un creditore privato sarebbe stato disposto a concedere ad Alitalia ulteriori finanziamenti vista la situazione di Alitalia nell'ottobre 2019 e i recenti avvenimenti che la riguardano. Come descritto nella sezione 2, Alitalia era stata dichiarata insolvente nel maggio 2017 e ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. Aveva ricevuto i prestiti del 2017, che sono stati oggetto di numerose proroghe.
- (74) In base alle informazioni pubblicamente disponibili, Alitalia ha continuato a registrare flussi di cassa negativi da quando è stata posta in amministrazione straordinaria, che hanno generato una perdita di 224 milioni di EUR nel 2018 <sup>(43)</sup>.
- (75) In secondo luogo, non è stata fornita alcuna prova dell'affidabilità creditizia di Alitalia sul mercato. Non è stato dimostrato che nel 2019 alcuna banca o altra istituzione finanziaria avrebbe aperto una linea di credito simile a quella concessa ad Alitalia. Le autorità italiane non hanno neppure presentato elementi a riprova del fatto che concedendo il prestito del 2019 lo Stato italiano, come creditore privato, aveva agito in modo finanziariamente prudente, a fronte dello scenario controfattuale, ossia la probabile liquidazione di Alitalia.
- (76) In terzo luogo, nella decisione di avvio del 2018 (cfr. il punto (30)), la Commissione ha osservato che le offerte relative al patrimonio di Alitalia sembravano insufficienti a coprire la restituzione dei prestiti del 2017 in aggiunta alla disponibilità di cassa prevista alla scadenza iniziale. A maggior ragione, pertanto, sembra meno probabile che il valore del patrimonio di Alitalia sarebbe stato sufficiente a coprire la restituzione del prestito del 2019.
- (77) In quarto luogo, nonostante la richiesta scritta dei servizi della Commissione, le autorità italiane non hanno fornito alcuna prova che dimostri che al momento della concessione del prestito del 2019 il valore del patrimonio di Alitalia sarebbe stato sufficiente a garantirne la restituzione.
- (78) La Commissione ritiene improbabile che un operatore privato avrebbe concesso i prestiti iniziali del 2017 visto che Alitalia avrebbe dovuto essere ceduta entro il novembre 2017; a maggior ragione, è ancora più improbabile che tale creditore avrebbe concesso un prestito aggiuntivo nel 2019 dopo il fallimento completo della procedura di cessione registrato fino a quel momento. Il continuo rinvio del completamento della procedura di cessione, le ripetute proroghe delle date di scadenza dei prestiti del 2017 senza il versamento di alcun interesse e la sospensione della restituzione, avrebbero probabilmente segnalato a un creditore privato che le prospettive di cessione di Alitalia erano addirittura peggiori di quanto inizialmente previsto.

<sup>(41)</sup> Sentenza del 6 marzo 2003, *Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione*, (West-LB) T-228/99 e T-233/99, EU:T:2003:57, punto 208.

<sup>(42)</sup> Cfr., in tal senso, la sentenza del 5 giugno 2012, *Commissione/EDF*, C-124/10 P, EU:C:2012:318, punto 90 e la sentenza del 15 marzo 1994, *Banco Exterior de España*, C-387/92, EU:C:1994:100, punto 14; sentenza del 19 maggio 1999, *Italia/Commissione*, C-6/97, EU:C:1999:251, punto 16.

<sup>(43)</sup> <http://www.amministrazionestraordinariaalitaliasai.com/pdf/alitalia/audizione27032019.pdf>

- (79) In quinto luogo, appare improbabile che un creditore privato sarebbe stato disposto ad aumentare la propria esposizione, a meno che non avesse avuto validi motivi per ritenere che, in considerazione della sua precedente esposizione, le sue perdite economiche sarebbero state ancora maggiori in mancanza del prestito concesso nel 2019. Nella fase attuale non vi è nulla che comprovi una tale situazione.
- (80) La Commissione ritiene che al momento di decidere se concedere il prestito del 2019, un operatore in un'economia di mercato avrebbe quindi valutato il suo interesse finanziario ad aumentare di 400 milioni di EUR l'esposizione verso Alitalia, tenendo debitamente conto della precedente esposizione di 900 milioni di EUR più interessi relativa alla precedente concessione dei prestiti del 2017. Tale operatore avrebbe pertanto valutato lo scenario controfattuale rispetto alla concessione del prestito del 2019 attraverso il confronto con la liquidazione che avrebbe probabilmente fatto seguito alla mancata concessione dell'importo di 400 milioni di EUR.
- (81) In caso di liquidazione, un creditore operante in un'economia di mercato avrebbe potuto aspettarsi di recuperare, presumendo l'assenza di altri importanti debiti contratti da Alitalia nell'ambito dell'amministrazione straordinaria, il valore di liquidazione delle attività di Alitalia (al netto delle spese procedurali) e il saldo di cassa disponibile. Tali proventi netti avrebbero consentito di coprire una parte dell'importo del capitale dei prestiti del 2017 per 900 milioni di EUR più gli interessi contrattuali maturati e dovuti per il semestre iniziale (circa 150 milioni di EUR <sup>(44)</sup>).
- (82) Per contro, per concedere il prestito aggiuntivo di 400 milioni di EUR, un creditore operante in un'economia di mercato avrebbe considerato il fatto che le uniche prospettive di rimborso dei prestiti potevano derivare dalla cessione delle attività di Alitalia, cessione che avrebbe richiesto tempi più lunghi e avrebbe generato ulteriori deflussi di cassa operativi negativi nonché interessi finanziari sui prestiti del 2017 e sul prestito del 2019.
- (83) Un operatore in un'economia di mercato avrebbe avuto interesse ad aumentare l'esposizione verso Alitalia solo se i proventi della cessione attesi, insieme alla liquidità disponibile al momento della cessione (stimata pari al saldo di cassa a ottobre 2019 più il flusso di cassa operativo negativo nel periodo operativo aggiuntivo di Alitalia), fossero stati almeno superiori alla liquidazione più i costi finanziari aggiuntivi nel periodo in questione.
- (84) Alla domanda della Commissione di fornire elementi di prova a sostegno della conformità al principio dell'operatore in un'economia di mercato del prestito del 2019, l'Italia non è riuscita a dimostrare di aver valutato detta conformità. La Commissione ritiene che nessun operatore in un'economia di mercato avrebbe effettuato l'operazione in assenza di uno studio controfattuale dettagliato volto a confrontare l'interesse ad accrescere l'esposizione verso Alitalia per realizzarne la cessione con la liquidazione che avrebbe probabilmente fatto seguito alla mancata concessione dell'importo di 400 milioni di EUR.
- (85) Conseguentemente, la Commissione conclude, in via preliminare, che il prestito del 2019 non è conforme al principio dell'operatore in un'economia di mercato.

#### 8.2.4.2.1. Esposizione precedente dello Stato in qualità di azionista di Alitalia

- (86) Come indicato al punto (24), nel 2017 l'Italia ha concesso ad Alitalia un importo di 900 milioni di EUR dopo che l'impresa era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. Pertanto, lo Stato era già esposto nei confronti di Alitalia per un importo di 900 milioni di EUR (senza contare i 150 milioni di EUR di interessi maturati) nel momento in cui ha deciso di concedere il prestito di 400 milioni di EUR.
- (87) Nella presente sottosezione, la Commissione valuta in via preliminare se sia pertinente considerare altre esposizioni precedenti, diverse dai prestiti del 2017, per valutare se il prestito del 2019 sia conforme al criterio dell'operatore in un'economia di mercato.

<sup>(44)</sup> Calcolo preliminare basato su: i) tasso di interesse Euribor a 6 mesi più 1 000 punti base; e, ii) date di concessione e di esborso dei prestiti.

- (88) Lo Stato italiano era detentore di una precedente esposizione nei confronti di Alitalia in qualità di azionista indiretto: infatti, lo Stato italiano detiene il 65 % di Poste Italiane assieme alla Cassa Depositi e Prestiti (35 %), anch'essa di proprietà statale, e Poste Italiane stessa possedeva il 2 % di CAI, che a sua volta controllava il 51 % di Alitalia SAI. Di conseguenza, lo Stato italiano era azionista indiretto di Alitalia, di cui deteneva una quota pari all'1 % circa.
- (89) La Commissione ritiene in via provvisoria che questa esposizione indiretta e relativamente di minoranza nei confronti di Alitalia non potesse giustificare l'intervento dell'Italia volto ad aumentare la sua esposizione verso Alitalia mediante il prestito concesso nel 2019: infatti, Alitalia era stata sottoposta ad amministrazione straordinaria e qualsiasi creditore in un'economia di mercato avrebbe ritenuto irrilevante mantenere una partecipazione così modesta al momento di decidere se concedere tale prestito a rischio.
- (90) I rischi associati alla restituzione del prestito del 2019 sono molto elevati, dal punto di vista di un azionista, se si tiene conto della mancanza di una prospettiva di risanamento: la riuscita di una ristrutturazione di Alitalia era infatti molto incerta dopo la bocciatura del piano di risanamento da parte dei dipendenti (cfr. il punto (16)). Inoltre, gli azionisti sarebbero stati gli ultimi ad essere rimborsati in base all'ordinanza di ripartizione dei potenziali proventi di una (eventuale) procedura di cessione delle attività di Alitalia nell'ambito dell'amministrazione straordinaria. Tenuto conto dell'importo dei debiti finanziari pre-insolvenza, era quindi improbabile che gli azionisti di Alitalia recuperassero alcunché in caso di cessione delle attività della compagnia aerea.
- (91) Questo ragionamento è ulteriormente confermato dal fatto che nessun altro azionista di Alitalia, come le banche Intesa o Unicredit o gli operatori industriali Atlantia, Etihad o Air France-KLM, abbia concesso un prestito ad Alitalia dopo l'entrata di quest'ultima in amministrazione straordinaria.
- (92) Inoltre, la Commissione osserva che lo Stato italiano non ha addotto il motivo della posizione quale creditore di mercato pre-insolvenza di Alitalia a sostegno della conformità al principio dell'operatore in un'economia di mercato nei confronti del prestito concesso nel 2019 ad Alitalia.
- (93) In conclusione, la Commissione conclude in via preliminare che un operatore in un'economia di mercato che si fosse trovato nella situazione dello Stato italiano non avrebbe tenuto conto della propria potenziale esposizione indiretta come azionista indiretto di minoranza di Alitalia al momento di decidere se concedere il prestito nel 2019 alla compagnia aerea, ma avrebbe tenuto conto soltanto della sua esposizione di 900 milioni di EUR derivante dai prestiti del 2017.

#### 8.2.4.3 Conclusioni provvisorie in merito all'esistenza di un vantaggio

- (94) Innanzitutto la Commissione conclude in via provvisoria che il principio dell'operatore in un'economia di mercato non sembra applicabile al prestito concesso nel 2019. In secondo luogo, anche supponendo che tale criterio fosse applicabile, la Commissione dubita che tale criterio sia soddisfatto per quanto riguarda il prestito del 2019.
- (95) Di conseguenza, la Commissione conclude, in via provvisoria, che il prestito concesso nel 2019 ha conferito un vantaggio economico ad Alitalia ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. L'Italia è invitata a fornire tutti i documenti e le prove pertinenti a sostegno delle sue dichiarazioni secondo le quali avrebbe agito come un operatore in un'economia di mercato quando ha concesso il prestito del 2019.

#### 8.2.5. Potenziale distorsione della concorrenza e conseguenze sugli scambi tra Stati membri

- (96) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, una misura costituisce aiuto di Stato quando falsa o minaccia di falsare la concorrenza o incide sugli scambi tra Stati membri.

- (97) Si ritiene che una misura concessa da uno Stato falsi o minacci di falsare la concorrenza qualora sia atta a migliorare la posizione del destinatario nei confronti di altre imprese concorrenti <sup>(45)</sup>. È dunque sufficiente che l'aiuto consenta al beneficiario di mantenere una posizione concorrenziale più forte di quella in cui si troverebbe se l'aiuto non fosse stato concesso.
- (98) Secondo la relazione trimestrale del commissario straordinario di Alitalia, pubblicata nel settembre 2018 <sup>(46)</sup>, il mercato italiano del trasporto aereo di passeggeri, in cui Alitalia è principalmente attiva, è altamente competitivo ed è caratterizzato, tra l'altro, da un'alta penetrazione dei vettori *low cost* sul mercato domestico (la più elevata in Europa) e intraeuropeo.
- (99) La Commissione conclude pertanto, in via provvisoria, che il prestito concesso nel 2019 sia tale da incidere sugli scambi tra Stati membri poiché riguarda Alitalia, segnatamente Alitalia SAI e Cityliner, la cui attività di trasporto, per sua natura, concerne numerosi Stati membri. Inoltre, il prestito del 2019 è anche atto a falsare o minacciare di falsare la concorrenza nel mercato unico, poiché riguarda solo due imprese che si trovano in concorrenza con altre compagnie aeree nella rete europea.

#### 8.2.6. Conclusione in merito all'esistenza di aiuti di Stato

- (100) In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude in via provvisoria che il prestito concesso a favore di Alitalia nel 2019 costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

### 9. LEGITTIMITÀ DELL'AIUTO

- (101) La Commissione osserva che il prestito del 2019 è stato concesso ad Alitalia senza alcuna notifica alla Commissione, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e dell'obbligo di astenersi dal dare esecuzione all'aiuto.
- (102) Pertanto, la Commissione conclude in via preliminare che il prestito concesso nel 2019 costituisce un aiuto di Stato illegale.

### 10. COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO

- (103) Nella misura in cui il prestito concesso nel 2019 costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione deve valutare se l'aiuto possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno.
- (104) Secondo la giurisprudenza costante della Corte, lo Stato membro che chiede di poter concedere aiuti in deroga alle norme del trattato è soggetto all'obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione.
- (105) In forza di tale obbligo, è tenuto in particolare a fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrano le condizioni della deroga richiesta <sup>(47)</sup>. Invitata a presentare osservazioni sulla compatibilità del prestito del 2019, l'Italia ha dichiarato soltanto che la compatibilità del prestito del 2019 dovrebbe essere valutata nell'ambito dell'indagine aperta con la decisione di avvio del 2018, senza fornire ulteriori informazioni che consentano alla Commissione di valutare la compatibilità del prestito del 2019.
- (106) La Commissione ritiene che Alitalia soddisfi i criteri per essere considerata un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 20, lettera c), degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, in quanto Alitalia SAI e Cityliner erano già state dichiarate insolventi quando il prestito del 2019 è stato concesso (cfr. il punto (1)). Di conseguenza, la Commissione ha potuto effettuare una valutazione della compatibilità del prestito del 2019 soltanto come aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione poiché, in quanto impresa in difficoltà, Alitalia non può beneficiare di alcun altro tipo di aiuto di Stato (cfr. il punto 23 dei citati orientamenti). Detti orientamenti stabiliscono le norme e le condizioni da considerare ai fini della valutazione della compatibilità di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

<sup>(45)</sup> Sentenza del 17 settembre 1980, *Philip Morris Holland BV/Commissione*, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punto 11.

<sup>(46)</sup> <http://www.amministrazionestraordinariaalitaliasai.com/pdf/alitalia/doc-3-relazione-az-trim-1-luglio-30-settembre-2018-omissis.pdf>

<sup>(47)</sup> Sentenza del 28 aprile 1993, *Repubblica italiana/Commissione*, C-364/90, ECLI:EU:C:1993:157, punto 20.

- (107) Due tipi di aiuti definiti negli orientamenti sono pertinenti nella fattispecie, vale a dire gli aiuti per il salvataggio e gli aiuti per la ristrutturazione.
- (108) Ai sensi del punto 26 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, gli aiuti per il salvataggio sono, per loro stessa natura, una forma di assistenza temporanea e reversibile. La loro finalità principale è consentire di mantenere in attività un'impresa in difficoltà per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.
- (109) Ai sensi del punto 27 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, gli aiuti per la ristrutturazione spesso comportano un'assistenza più permanente e devono ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario in base a un piano di ristrutturazione realistico, coerente e di ampia portata, consentendo, al contempo, un sufficiente contributo proprio e una condivisione degli oneri e limitando le potenziali distorsioni della concorrenza.
- (110) L'Italia non ha fornito alcun elemento che dimostri che il prestito concesso nel 2019 soddisfa i criteri degli aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione previsti dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione.
- (111) Per essere considerati compatibili con gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, gli aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione devono soddisfare una serie di criteri cumulativi previsti al punto 3 degli orientamenti, e segnatamente: a) contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune; b) necessità dell'intervento statale; c) adeguatezza della misura di aiuto; d) effetto di incentivazione; e) proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo); f) prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri; g) trasparenza dell'aiuto.
- (112) A norma del punto 39 di detti orientamenti: «Qualora uno dei criteri di cui sopra non sia soddisfatto, l'aiuto non sarà considerato compatibile con il mercato interno.»
- (113) A tale riguardo, con riferimento agli aiuti finalizzati sia al salvataggio sia alla ristrutturazione, spetta allo Stato membro in questione fornire gli elementi necessari per stabilire se l'aiuto possa essere considerato compatibile. In particolare, lo Stato membro deve individuare e definire un obiettivo di interesse comune in linea con le condizioni stabilite negli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, dato che la valutazione del rispetto degli altri criteri dipende da tale obiettivo. La Commissione non può, di propria iniziativa, definire tale obiettivo in sostituzione di quello dello Stato membro qualora esso non vi provveda. Per quanto riguarda l'obiettivo di interesse comune, la Commissione osserva che l'Italia non ha fornito alcun elemento di prova che dimostri che il prestito del 2019 è stato concesso, come stabilito al punto 43 dei citati orientamenti «*in quanto è volto a prevenire problemi di ordine sociale o a risolvere fallimenti del mercato ..., ripristinando la redditività a lungo termine dell'impresa ...*».
- (114) Accertare che l'aiuto persegua un obiettivo di comune interesse è una condizione preliminare essenziale per l'analisi di diversi altri criteri. Alla luce di quanto precede, a questo stadio della procedura, non si può dimostrare i) che l'intervento dello Stato era necessario per perseguire un obiettivo di comune interesse, ii) che l'aiuto era adeguato, iii) che l'effetto di incentivazione è stato soddisfatto, iv) che l'aiuto era limitato al minimo e che non vi sono stati effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.
- (115) Atteso che, come stabilito al punto 39 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, qualora uno dei criteri di cui sopra non sia soddisfatto, l'aiuto non può essere considerato compatibile con il mercato interno, la Commissione, a questo stadio della procedura, conclude pertanto in via provvisoria che il prestito concesso nel 2019 non poteva essere considerato un aiuto per il salvataggio o un aiuto per la ristrutturazione compatibile con il mercato interno a norma degli orientamenti.
- (116) Nonostante tale conclusione provvisoria, nei punti che seguono la Commissione valuta per completezza anche se il prestito concesso nel 2019 soddisfa altre condizioni stabilite dai citati orientamenti.

- (117) In primo luogo, conformemente ai punti 70 e 71 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, gli aiuti possono essere concessi alle imprese in difficoltà per una sola operazione di ristrutturazione. Pertanto, qualora siano trascorsi meno di 10 anni dall'erogazione precedente di un aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione o di una misura temporanea di sostegno alla ristrutturazione oppure dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione - a seconda di cosa sia avvenuto per ultimo - la Commissione non autorizzerà altri aiuti (principio dell'aiuto «una tantum»).
- (118) Poiché è possibile che Alitalia abbia beneficiato di un aiuto per il salvataggio nel 2017 <sup>(48)</sup> grazie ai prestiti concessi nel 2017, a questo stadio della procedura la Commissione nutre anche dubbi sul fatto che il principio dell'aiuto «una tantum» sia stato rispettato; se tale dubbio fosse confermato, il prestito concesso nel 2019 non potrebbe essere considerato un aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione compatibile con il mercato interno.
- (119) In secondo luogo, per quanto riguarda la proporzionalità del prestito del 2019 come aiuto al salvataggio, la Commissione non dispone di alcun elemento di prova circa la proporzionalità dell'aiuto in quanto l'Italia non ha fornito dati sul fabbisogno di tesoreria di Alitalia e in tali circostanze la Commissione non è in grado di stabilire se il prestito del 2019 fosse il minimo necessario per mantenere Alitalia in attività per sei mesi.
- (120) In terzo luogo, per quanto riguarda gli aiuti per la ristrutturazione, le autorità italiane non hanno presentato alla Commissione né un piano di ristrutturazione finalizzato a ripristinare la redditività a lungo termine né un piano di liquidazione per la cessione delle attività di Alitalia e la successiva liquidazione della società entro un lasso di tempo ragionevole, come richiesto dal punto 55, lettera d), punti ii) e iii), degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione.
- (121) In quarto luogo, per quanto riguarda la proporzionalità del prestito del 2019 quale aiuto per la ristrutturazione, come stabilito al punto 61 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, l'importo e l'intensità dell'aiuto per la ristrutturazione devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione, in funzione delle risorse finanziarie esistenti del beneficiario, dei suoi azionisti o del gruppo di cui fa parte. In particolare deve essere garantito un livello sufficiente di contributo proprio ai costi della ristrutturazione e la ripartizione degli oneri. L'Italia non ha fornito alcun elemento a comprova del fatto che un investitore o un gruppo di investitori avrebbe fornito di nuovo un simile contributo proprio che avrebbe dovuto corrispondere all'importo dell'aiuto (almeno all'importo del capitale dei prestiti) come richiesto dalla sezione 3.5.2.1 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione.
- (122) In quinto e ultimo luogo, ai sensi del punto 76 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, per limitare il più possibile gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi, in modo che prevalgano gli effetti positivi, nel concedere aiuti per la ristrutturazione devono essere adottate misure volte a limitare distorsioni della concorrenza (le «misure di compensazione»). Le autorità italiane non hanno presentato alcuna misura di compensazione per evitare tali indebite distorsioni della concorrenza, quali una riduzione della capacità disponibile dei posti-km o la riduzione degli slot, come previsto dalla sezione 3.6.2 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione.
- (123) Per i motivi di cui sopra, in questa fase dell'indagine, la Commissione è giunta alla conclusione provvisoria che il prestito concesso nel 2019 non soddisfa le condizioni stabilite dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione.

#### 10.1. Conclusione in merito alla compatibilità dell'aiuto di Stato

- (124) Di conseguenza, in questa fase dell'indagine, la Commissione conclude in via provvisoria che vi sono seri dubbi circa la compatibilità del prestito concesso nel 2019 con il mercato interno e invita le autorità italiane e tutte le parti interessate a presentare osservazioni.

<sup>(48)</sup> L'Italia ha notificato i prestiti del 2017 come aiuto per il salvataggio dopo la sua concessione, tuttavia i prestiti del 2017 non sono stati restituiti dopo sei mesi né convertiti in aiuto per la ristrutturazione mediante l'invio di un piano di risanamento realizzabile come previsto dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione.

## 11. CONCLUSIONI

- (125) Per i motivi di cui sopra, in questa fase dell'indagine, la Commissione conclude in via provvisoria che il prestito concesso nel 2019 costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, che è stato concesso in violazione dell'obbligo di astenersi dal dare esecuzione all'aiuto di cui dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, e che ci sono seri dubbi sulla sua compatibilità con il mercato interno.

La Commissione richiama l'attenzione dell'Italia sul fatto che l'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ha effetto sospensivo, ricordando alle autorità italiane che l'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio stabilisce che ogni aiuto illegale può formare oggetto di recupero presso il beneficiario.

La Commissione comunica all'Italia che intende informare i terzi interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi significativa della stessa nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione informerà inoltre le parti interessate degli Stati EFTA firmatari dell'accordo SEE attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Le parti interessate saranno invitate a presentare osservazioni entro un mese dalla data della suddetta pubblicazione.

---





ISSN 1977-0928 (edición electrónica)  
ISSN 1725-244X (edición papel)



Oficina de Publicaciones  
de la Unión Europea  
L-2985 Luxemburgo  
LUXEMBURGO

ES